CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
05 MAR. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 13:00

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PROYECTO DE LEY

La Congresista de la República que suscribe **MARÍA GRIMANEZA ACUÑA PERALTA** del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso, en uso de su derecho de iniciativa legislativa establecido en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 22, literal (c), 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente iniciativa legislativa:

FÓRMULA LEGAL

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo No 1. Del objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto la optimización de los procesos de contratación de las distintas entidades estatales respecto de bienes, servicios y obras, asimismo el establecimiento de un rango de funcionamiento, en donde se establezcan los límites y las sanciones claras y transparentes para todos los actores involucrados en las diversas etapas de los procesos; de tal forma que se logre la mejora la calidad de vida de los ciudadanos, bajo un enfoque de integridad y gestión por resultados.

Artículo 2. De la finalidad
La presente Ley tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Artículo 3. De la Ley de Contrataciones del Estado

INDICE

TÍTULO I – DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I – LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El objeto y La Finalidad
Artículo 2. Los principios establecidos en las contrataciones
Artículo 3: El ámbito de aplicación de la norma
Artículo 4: Los supuestos excluidos del ámbito de aplicación
Artículo 5. Los Contratos Menores
Artículo 6. La sujeción a Acuerdos Comerciales
CAPÍTULO II - LOS ACTORES INVOLCUCRADOS Y RESPONSABLES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Artículo 7. Los funcionarios, las dependencias y los órganos involucrados en los procesos de contratación
Artículo 8. La organización de los procedimientos de contratación
Artículo 9. Las responsabilidades esenciales
Artículo 10. La supervisión de la entidad

TÍTULO II - DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
CAPÍTULO III - EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 11. La definición

Artículo 12. Las funciones del OSCE
Artículo 13. Los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE
Artículo 14. La organización y los recursos del OSCE
Artículo 15. El Consejo Directivo y La Presidencia Ejecutiva del OSCE
Artículo 16. Los Requisitos e impedimentos para la designación del Consejo Directivo o presidente ejecutivo del OSCE.

CAPÍTULO IV - EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 17. El Tribunal de Contrataciones del Estado
Artículo 18. Los requisitos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado

CAPÍTULO V - LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Artículo 19. La definición
Artículo 20. La organización y los recursos de Perú Compras
Artículo 21. El jefe de Perú Compras
Artículo 22. Los Requisitos para la designación del jefe de Perú Compras

CAPÍTULO VI - LA VACANCIA, LAS NOTIFICACIONES Y OTROS
Artículo 23. Las causales de vacancia del Consejo Directivo, presidente ejecutivo del OSCE o de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Artículo 24. Las causales de vacancia del jefe de Perú Compras
Artículo 25. Las Notificaciones

TÍTULO III - DE LOS PROVEEDORES

CAPITULO VII - EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
Artículo 26. La definición

CAPITULO VIII - LAS CONDICIONES EXIGIBLES A PROVEEDORES
Artículo 27. Los proveedores
Artículo 28. Los Impedimentos para ser proveedor del Estado
Artículo 29. La calificación exigible a los proveedores
Artículo 30. La participación en consorcio
Artículo 31. La protección y promoción de la competencia y la prevención del delito

TÍTULO IV - DE LOS ROLES DETERMINADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CAPITULO VIII - LOS ROLES DETERMINADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Artículo 32. Los roles de los participantes en los procesos de contratación
Artículo 33. Las responsabilidades en el proceso de contratación
Artículo 34. La supervisión en el proceso de contratación

TÍTULO V - DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO X - LAS GENERALES Y LA PLANIFICACIÓN
Artículo 35. La Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado
Artículo 36. El Plan Anual de Contrataciones
Artículo 37. Las disposiciones generales del proceso de contratación

CAPITULO XI - LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
Artículo 38. El requerimiento
Artículo 39. La interacción con el mercado
Artículo 40. La homologación de requerimientos
Artículo 41. El Valor Referencial y El Valor Estimado
Artículo 42. El requisito de Certificación de Crédito Presupuestario para convocar procedimientos de selección
Artículo 43. La prohibición de fraccionamiento

CAPITULO XII - LA SELECCIÓN
Artículo 44. Los procedimientos de selección
Artículo 45. La Licitación pública y El Concurso Público
Artículo 46. La Adjudicación Simplificada
Artículo 47. La selección de consultores individuales
Artículo 48. La Comparación de Precios
Artículo 49. La Subasta Inversa Electrónica
Artículo 50. Las Contrataciones Directas
Artículo 51. El rechazo de ofertas
Artículo 52. La declaratoria de desierto
Artículo 53. La cancelación de un proceso de selección
CAPÍTULO XIII - LOS MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
Artículo 54. La estrategia de contratación
Artículo 55. Los métodos especiales de contratación
Artículo 56. La compra por encargo
Artículo 57. La compra centralizada
Artículo 58. La compra corporativa
Artículo 59. La compra pública de innovación
Artículo 60. Los Acuerdos Marco
Artículo 61. Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
Artículo 62. Los procesos de selección competitivos
Artículo 63. Los procesos de selección no competitivos
CAPÍTULO XIV - LAS CONTRATACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
Artículo 64. La Situación de Emergencia
Artículo 65. Las contrataciones para la prevención y atención de situaciones de emergencia.
CAPÍTULO XV – EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Artículo 66. El contrato
Artículo 67. La garantía
Artículo 68. La modificación contractual
Artículo 69. La cesión de derechos y de posición contractual
Artículo 70. La resolución del contrato
Artículo 71. Los adelantos y los fideicomisos
Artículo 72. Los Pagos
Artículo 73. Las responsabilidades en la ejecución contractual
Artículo 74. La nulidad del contrato

TÍTULO VI - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CAPITULO XVI - LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Artículo 75. Las disposiciones generales
Artículo 76. El recurso de apelación
CAPITULO XVII - LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Artículo 77. Las disposiciones generales
Artículo 78. La Junta de Resolución de Disputas
Artículo 79. La Conciliación
Artículo 80. El Arbitraje
CAPITULO XVIII - LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN CONTRATOS ESTÁNDAR, ESPECIALES Y CAUTELARES Y OTROS
Artículo 81. Los medios de Solución de Controversias en contratos estándar de ingeniería y construcción
Artículo 82. Las Medidas Cautelares
Artículo 83. La Denegatoria Ficta

TÍTULO VII – DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO XVII - LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 84. Las infracciones y sanciones administrativas a postulantes, proveedores, contratistas y subcontratistas
Artículo 85. Las infracciones y sanciones administrativas a los profesionales del plantel técnico de los proveedores.
Artículo 86. Las consideraciones para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Artículo 87. Las sanciones administrativas aplicables a las Instituciones Arbítrales y a los Centros de administración de Juntas de Resolución de Disputas

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Prevalencia de las normas de contratación pública
SEGUNDA. Excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información
TERCERA. Regímenes especiales de contratación
CUARTA. Régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)
QUINTA. Contrataciones de las Empresas del Estado
SEXTA. Colaboración entre Entidades
SÉTIMA. Contrataciones para el mantenimiento vial
OCTAVA. Previsión Presupuestal en las Compras Centralizadas
NOVENA. Contrataciones de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos con proveedores no domiciliados.
DÉCIMA. Competencia judicial para actuaciones de OSCE
DÉCIMA PRIMERA. Contrataciones para la continuidad de proyectos bajo el Decreto Legislativo N° 1362

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA. Integración de las plataformas sobre contrataciones del Estado
SEGUNDA. Procesos a cargo de la Dirección de Arbitraje de OSCE

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación

TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El objeto y La Finalidad

La presente ley tiene por objeto la optimización de los procesos de contratación de las distintas entidades estatales respecto de bienes, servicios y obras, asimismo el establecimiento de un rango de funcionamiento, en donde se establezcan los límites y las sanciones claras y transparentes para todos los actores involucrados en las diversas etapas de los procesos; de tal forma que se logre la mejora la calidad de vida de los ciudadanos, bajo un enfoque de integridad y gestión por resultados.

La presente Ley tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las

contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Artículo 2. Los principios establecidos en las contrataciones

2.1 Las contrataciones del Estado, dentro del marco normativo nacional que puedan ser aplicables a determinados procesos de contratación, se rigen bajo los siguientes principios:

a) **Libertad de concurrencia**.
Todas las entidades públicas deben de promover el libre acceso al mercado, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Considerando que, no puede concurrir a un proceso, el que esté impedido por mandato judicial o por sanción administrativa del Estado.

b) **Igualdad de trato.**
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades y condiciones para participar, está prohibida la existencia de algún privilegio o trato discriminatorio para algún participante. No se puede tratar de manera diferente situaciones que son similares.

c) **Transparencia y Publicidad.**
Las Entidades proporcionan la información que transparente todas las etapas de la contratación. Este debe de ser objeto de la publicidad y difusión necesaria, que permita la adecuada supervisión y el control de las contrataciones.

d) **Competencia.**
Los procesos de contratación deben de establecer las condiciones que generen una competencia efectiva, de tal forma que los concursos y evaluaciones concluyan en la obtención la propuesta más ventajosa que satisfaga el interés público.

e) **Eficacia**
Los procesos de contratación se orientan al efectivo y oportuno cumplimiento de los objetivos públicos, garantizando la calidad técnica de los Expedientes Técnicos, Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia.

f) **Vigencia Tecnológica y Sostenibilidad Ambiental y Social**.
Los bienes, servicios y obras adquiridos o contratados deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un tiempo de duración técnicamente determinado y con posibilidad de adecuarse a los siguientes avances tecnológicos. En el diseño y desarrollo de la contratación pública deben de considerarse criterios que permitan contribuir a la protección medioambiental, social y al desarrollo humano.

g) **Equidad.**
Las acciones de todos los actores de los procesos de contratación deben de orientarse a la obtención del equilibrio, así como la proporcionalidad de los derechos y las obligaciones de los proveedores y del Estado.

h) **Integridad**.
La conducta de los participantes en todo proceso de contratación se fundamenta en la honestidad, la veracidad y la rendición de cuentas, quedando prohibida cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera inmediata, directa y oportuna.

i) **Responsabilidad Administrativa.**
Las Entidades, funcionarios y servidores públicos relacionados con las actividades de todo proceso de contratación, están obligados a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia de los incumplimientos injustificados de los procesos normados de su actividad administrativa.

j) **Valor por Dinero.**
Las Entidades contratantes no deben de basar su decisión de compra solamente en el

precio, deben de establecer un enfoque multicriterio y se comprometen a buscar el mejor resultado posible en la inversión de los fondos públicos, en términos, entre otros factores, el ciclo de vida, la calidad y la sostenibilidad y el desempeño social de los bienes y servicios.

Artículo 3: El ámbito de aplicación de la norma

3.1 Se encuentran comprendidos en lo normado por la presente norma:

a) Los Ministerios, sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos.
b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
c) Los Gobiernos Regionales, sus programas y proyectos adscritos.
d) Los Gobiernos Locales, sus programas y proyectos adscritos.
e) Las Universidades Públicas.
f) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.
g) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado.
h) El Seguro Social de Salud (EsSalud)
i) Las Fuerzas Armadas
j) La Policía Nacional del Perú

3.2 Para efectos de la presente Ley, se consideran entidades contratantes a los órganos desconcentrados, así como a todas las organizaciones públicas creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones

3.3 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos.

Artículo 4: Los supuestos excluidos del ámbito de aplicación

4.1 La presente norma no es de aplicación para:

a) Los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todo servicio accesorio o auxiliar a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel normado en el Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público o norma que la sustituya.
b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional
c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.
d) La contratación de notarios públicos.

e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, peritos, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de otros medios de solución de controversias.
f) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, en las entidades o empresas del Estado.
g) La compra de bienes que realicen las entidades mediante remate público.
h) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo 1224 y Decreto Legislativo 674, o normas que lo sustituyan.
i) Las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales.
j) La contratación de servicios públicos, cuando no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.
k) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, que no tengan ningún tipo de subsidiaria, ni sean accionistas, ni tengan accionistas comunes con ninguna empresa domiciliada en el país.
l) Las contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, con carácter de secreto o que, por razones de orden interno, deban mantenerse en reserva conforme a Ley.
m) La adquisición de inmuebles que determine la Unidad Ejecutora de una obra de infraestructura, que sean fundamentales para el desarrollo de la obra, que se realice dentro de los alcances del DL 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de Obras de Infraestructura.
n) La contratación de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación en la etapa de trato directo y en la fase arbitral o de conciliación para la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión que efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas.
o) La suscripción a publicaciones científicas y/o especializadas, así como la contratación de licencias, renovación y/o la suscripción para el uso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales de los que el Perú es parte.
p) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades contratantes, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, no se persigan fines de lucro, no se obtengan utilidades y solo se reconozcan los costos en que incurre la entidad a cargo de la entrega del bien, servicio u obra, previo informe técnico y legal. Las contrataciones internacionales que realice el Estado peruano conjuntamente con otros Estados en el marco de lo establecido por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud u otros acuerdos supranacionales para el acceso equitativo a tecnologías sanitarias.
q) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto. En caso que las donaciones provengan de organismos multilaterales financieros, no es requisito el porcentaje señalado.
r) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando se cumpla uno de los siguientes supuestos:

i) No sea posible realizar la contratación a través de los mecanismos de contratación estratégica o los procedimientos de selección de la presente Ley.
ii) El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.
iii) Las contrataciones relacionadas a actividades de promoción y participación del Perú que tengan carácter oficial en ferias, cumbres, competiciones y similares, en materia comercial, de inversiones, exportaciones, turismo, así como de imagen país, en territorio extranjero. Los supuestos señalados precedentemente se sustentan con informe técnico y legal.

s) Los acuerdos celebrados entre el Estado peruano con otro Estado y las contrataciones que se realicen en el marco de aquellos.
t) Las contrataciones de bienes, servicios, servicios de consultoría de obras y obras necesarias para los procesos de adquisición de predios y liberación de interferencias en los proyectos que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte.

4.2 Los contenidos de los literales i), j), r), r), s) y t) serán supervisadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE).

Los contenidos del literal c), deberá ser autorizado mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de ministros, declarando de interés nacional el objeto de contratación y previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Artículo 5. Los Contratos Menores

5.1 Se consideran Contratos Menores aquellos cuyos montos sean iguales o inferiores a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la contratación.

5.2 Las entidades contratantes realizan el proceso de contratación conforme a las disposiciones del Reglamento.

Artículo 6. La sujeción a Acuerdos Comerciales

6.1 Los procesos de contratación se realizarán en el marco de las disposiciones establecidas en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales vigentes en los que el Perú sea parte.

6.2 Las contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de Trato Nacional y No Discriminación, las entidades contratantes aplicarán los mismos en todos los actos del proceso, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y en la normativa de la materia.

CAPÍTULO II
LOS ACTORES INVOLCUCRADOS Y RESPONSABLES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Artículo 7. Los funcionarios, las dependencias y los órganos involucrados en los procesos de contratación

Están involucrados en el proceso de la contratación pública de acuerdo a sus competencias:

a) La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
b) El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
c) La Central de Compras Públicas (Perú Compras).
d) La Entidad Contratante. A través de los órganos y unidades orgánicas que llevan a cabo el proceso administrativo, financiero y la contratación de bienes, servicios u obras.
e) El Titular de la Entidad y otros funcionarios, de acuerdo a sus competencias
f) Los Proveedores del Estado.
g) Los Comités de Selección que se conformen

Artículo 8. La organización de los procedimientos de contratación

8.1 Los procesos de contratación son organizados por una entidad pública, que tiene una necesidad y posee fondos públicos asignados a la contratación.

8.2 Se puede mediante convenio, encargar a otra entidad pública las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

8.3 Excepcionalmente, de acuerdo a la complejidad y especialidad del procedimiento, se pueden encargar las actuaciones preparatorias y/o procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa del órgano competente y siguiendo las condiciones establecidas en la normatividad nacional e internacional.

El reglamento desarrolla los requisitos que deben cumplir los objetos contractuales y demás condiciones para efectuar el encargo.

8.4 El convenio entre la entidad y el organismo internacional debe incluir cláusulas que establezcan expresamente la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del convenio por parte del organismo internacional al Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE) y a los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, en forma obligatoria, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Los procedimientos de contratación encargados a entidades internacionales o cooperantes estarán sujetos al ámbito de los órganos de control nacional

Artículo 9. Las responsabilidades esenciales

Los funcionarios y/o servidores que participan en un proceso de contratación por encargo o función de la entidad contratante son responsables de la organización y conducción del mismo, así como de la ejecución del contrato y el cumplimiento de la normatividad, bajo la estrategia de una gestión basada en resultados y de un enfoque de valor por dinero, procurando la eficiencia de los resultados de las decisiones que adopten.

En los casos del principio de Valor por Dinero, la infracción o sanción será determinada conforme al criterio de la entidad, de corresponder, la determinación de responsabilidades por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad contratante, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 10. La supervisión de la entidad

La entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles. El hecho de que la entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

TÍTULO II
DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

CAPÍTULO III
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 11. La definición

11.1 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (referido en adelante como OSCE) es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (referido en adelante como MEF), con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera.

11.2 El OSCE supervisa y coadyuva al cumplimiento de la normativa de contratación pública.

Artículo 12. Las funciones del OSCE

12.1 El OSCE tiene las siguientes funciones:

a) Supervisar de forma selectiva o aleatoria los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores, y suspender los procedimientos de selección en los que, durante las acciones de supervisión, se identifiquen riesgos o transgresiones que impidan el cumplimiento de los fines de la contratación.
b) Orientar a los usuarios en la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado y el Registro Nacional de Proveedores (referido en adelante como RNP).
c) Brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública.
d) Gestionar, integrar datos y evaluar el desempeño de la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado.
e) Formular, aprobar y difundir directivas y lineamientos en materia de su competencia, así como herramientas de gestión para el cumplimiento de su rol supervisor.
f) Administrar el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Listado de profesionales no elegibles que integren el plantel de profesionales propuestos por los proveedores del Estado.
g) Administrar y sistematizar el Banco de Laudos Arbitrales sobre contrataciones del Estado.
h) Administrar el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de administración de Juntas de Resolución de Disputas que resuelvan controversias en materia de contrataciones del Estado.
i) Supervisar de oficio, de manera selectiva y/o aleatoria o a pedido de parte, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para ser incluidos y/o excluidos en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de disputas que resuelven controversias en contrataciones del Estado.
j) Sancionar a las Instituciones Arbitrales y Centros de administración de Juntas de Resolución de Disputas que resuelvan controversias en materia de contrataciones del Estado, conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento.
k) Aprobar el Código de Ética para Arbitraje en Contrataciones del Estado.

12.2 Las Entidades Contratantes se encuentran obligadas, bajo responsabilidad, a brindar de manera oportuna la información y/u opinión técnica que les requiera el OSCE en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13. Los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE

13.1 Están sujetos a supervisión del OSCE, los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.
b) La contratación de servicios públicos, cuando no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.
c) Los convenios de colaboración, suscritos entre entidades públicas, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.
d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.
e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado.
f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

    i. Se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente norma.
    ii. El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.

13.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El OSCE establece los criterios para la supervisión.

Artículo 14. La organización y los recursos del OSCE

14.1 El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica del OSCE, así como las funciones generales y específicas de sus órganos.

14.2 El OSCE cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

14.3 Los recursos que el OSCE gestiona son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
b) Los generados por el cobro de tasas.
c) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios.
d) Los generados por ejecución de las garantías por la interposición del recurso de apelación.
e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional, las donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor.
f) Los provenientes de la imposición de sanciones económicas y penalidades.

g) Los demás que le asigne la normativa.

14.4 El OSCE tiene facultad coactiva sobre los recursos de su competencia, que son referidos en los literales b), c), d) y f) del numeral 14.3 del presente artículo.

Artículo 15. El Consejo Directivo y La Presidencia Ejecutiva del OSCE

15.1 El Consejo Directivo es el máximo órgano del OSCE, está integrado por tres miembros designados mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, por un período de tres años renovables. El presidente ejecutivo del OSCE preside el Consejo Directivo.

15.2 Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas, a excepción de su presidente. Sus funciones se encuentran previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE y sesionan como mínimo una vez por mes.

15.3 El presidente ejecutivo del OSCE es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la Entidad. Su cargo es remunerado y sus funciones se encuentran previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. El presidente ejecutivo es designado mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, por un período de tres años renovables.

Artículo 16. Los requisitos e impedimentos para la designación del Consejo Directivo o presidente ejecutivo del OSCE.

Para ser designado miembro del Consejo Directivo o presidente ejecutivo del OSCE, se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita demostrando no menos de cinco años de experiencia en cargos de director o Gerente General de entidad pública, o no menos de diez años de experiencia en cargo gerencial en temas afines a las materias reguladas en esta norma.
b) Contar con título profesional universitario y grado de maestría en materias administrativas, económicas o ingeniería.
c) No tener sentencia condenatoria por delito doloso ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional; así como no estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública, conforme a la normativa sobre la materia.
d) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la designación.
e) No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación ni encontrarse impedidas para contratar con el Estado conforme a la presente Ley

CAPÍTULO IV
EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 17. El Tribunal de Contrataciones del Estado

17.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo del OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

17.2 Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver las controversias relacionadas a los actos desarrollados durante los procedimientos de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, que surjan entre las entidades contratantes y los proveedores, o entre estos y la Central de Compras Públicas (Perú Compras), en los casos que corresponda según la presente Ley y el Reglamento, manteniendo coherencia entre sus decisiones en casos análogos.
b) Aplicar las sanciones de multa, así como la inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, postulantes a proveedores, o a integrantes de sus planteles técnicos, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.
c) Aplicar multas a las Entidades Contratantes, cuando actúen como proveedores.
d) Las demás funciones que le otorga la normativa.

17.3 La conformación inicial y el número de salas del Tribunal de Contrataciones del Estado son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

17.4 El presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es designado por el Consejo Directivo del OSCE.

17.5 Los acuerdos adoptados en Sala Plena, constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente norma y su reglamento.

17.6 Las resoluciones que emitan las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado deben guardar criterios de predictibilidad.

Artículo 18. Los requisitos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado

18.1 Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público de méritos conducido por un Comité Multisectorial integrado por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un representante de la Presidencia del Consejo de ministros, quien presidirá el comité.
Los procedimientos para la evaluación, selección y la designación de los Vocales son establecidos mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de ministros. Los Vocales ejercen funciones por un período de tres años, renovables y tienen la condición de funcionarios de designación y remoción regulada.

18.2 Para ser elegido como Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado se requiere:

a) Contar con título profesional universitario.
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita demostrando no menos de cinco años de experiencia en cargos de director o Gerente General de entidad pública, o no menos de diez años de experiencia en cargo gerencial en temas afines a las materias reguladas en esta norma.
c) Tener grado de maestría en materias administrativas, económicas o ingenierías.
d) No tener sentencia condenatoria por delito doloso, ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional, ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
e) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la postulación.

f) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.
g) No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la postulación ni encontrarse impedido para contratar con el Estado conforme a la presente Ley.

18.3 Culminado el período señalado en el numeral 18.1 del presente artículo, el Vocal continúa en el ejercicio de sus funciones en tanto se designe al vocal que lo sustituya.

CAPÍTULO V
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Artículo 19. La definición

19.1 La Central de Compras Públicas (en adelante Perú Compras) es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

19.2 Son funciones de Perú Compras:

a) Gestionar y efectuar, según corresponda, la estandarización los requerimientos que contrata el Estado.
b) Gestionar, integrar datos y evaluar el desempeño de las herramientas digitales a su cargo, las cuales forman parte de la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado.
c) Gestionar y difundir directivas y lineamientos en materias de su competencia y respecto de las herramientas digitales que administra, así como herramientas de gestión para el cumplimiento de sus funciones.
d) Gestionar los procedimientos de selección para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes.
e) Gestionar Compras Corporativas, Centralizadas y de Emergencia.
f) Realizar contrataciones por encargo a favor de otras entidades públicas contratantes.

Artículo 20. La organización y los recursos de Perú Compras

20.1 la estructura orgánica y funcional de Perú Compras es desarrollada en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

20.2 Los recursos de Perú Compras son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
b) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional, las donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor.
c) Los provenientes de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento por las contrataciones o acuerdos marco que administre.
d) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios.
e) Los provenientes de penalidades.
f) Los demás que le asigne la normativa.

Artículo 21. El jefe de Perú Compras

El jefe de Perú Compras es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la Entidad. Es designado mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 22. Los Requisitos para la designación del jefe de Perú Compras

Para ser designado jefe de Perú Compras, se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita demostrando no menos de cinco años de experiencia en cargos de director o Gerente General de entidad pública, o no menos de diez años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en la presente Ley.
b) Contar con título profesional universitario y grado de maestría en materias administrativas, económicas o ingeniería.
c) No tener sentencia condenatoria por delito doloso ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional; así como no estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública, conforme a la normativa sobre la materia.
d) No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año previo a la designación.
e) No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
f) No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación ni encontrarse impedido para contratar con el Estado conforme a la presente Ley.

CAPÍTULO VI
LA VACANCIA, LAS NOTIFICACIONES Y OTROS

Artículo 23. Las causales de vacancia del Consejo Directivo, presidente ejecutivo del OSCE o de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo o del presidente ejecutivo del OSCE se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, la vacancia de un Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado se formaliza mediante resolución suprema refrendada por presidente del Consejo de ministros; y se produce por cualquiera de las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.
b) Fallecimiento.
c) Incapacidad física y/o mental permanente.
d) Condena por delito doloso, mediante sentencia firme.
e) Falta grave tipificada en el reglamento
f) Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada.
g) Vencimiento del período de designación.
h) Inasistencia injustificada a tres sesiones del Consejo Directivo consecutivas o a cinco no consecutivas, en el período de un año.
i) Incompatibilidad sobreviniente

Artículo 24. Las causales de vacancia del jefe de Perú Compras

La vacancia se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, y se produce por cualquiera de las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.
b) Fallecimiento.
c) Incapacidad física y/o mental permanente.
d) Condena por delito doloso, mediante sentencia firme.
e) Falta grave tipificada en el reglamento
f) Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada.
g) Cese y nuevo nombramiento del cargo por parte del ministro de Economía.
h) Incompatibilidad sobreviniente

Artículo 25. Las Notificaciones

El OSCE y Perú Compras notifican los actos que emiten en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la legislación vigente.

TÍTULO III
DE LOS PROVEEDORES

CAPITULO VII
EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Artículo 26. La definición

26.1 El Registro Nacional de Proveedores (en adelante RNP) es el sistema oficial de la Administración Pública que tiene por objeto optimizar la gestión de la información general de los proveedores interesados en participar en los procesos de contrataciones que realiza el Estado. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada.

Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el RNP. En el Reglamento se establecen los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro.

En el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento establecerá las condiciones de inscripción ante dicho registro, así como las excepciones. La presentación de documentación falsa o información inexacta ante RNP habilita inmediatamente la declaración de nulidad del acto correspondiente.

26.2 Los proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el RNP cuentan con una capacidad de contratación conforme se establece en el reglamento.

26.3 Ninguna entidad puede solicitar a un proveedor, para participar en un proceso, la incorporación en alguna base de datos interna que la entidad realice.

26.4 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente de forma gratuita,

preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas previstas por Ley.

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de esta disposición.

26.5 Si alguna información ya obra en el Registro Nacional de Proveedores, estos tienen el derecho a no presentarla ante las entidades que se las requieran, debiendo entregar una declaración jurada y las entidades verificar su contenido en el Registro Nacional de Proveedores.

26.6 La información que obra en el Registro Nacional de Proveedores es de acceso público, con la excepción de aquella información confidencial de índole tributaria, bancaria o comercial de las personas inscritas

CAPITULO VIII
LAS CONDICIONES EXIGIBLES A PROVEEDORES

Artículo 27. Los proveedores

Los proveedores son personas que pueden tener la categoría de naturales, jurídicas o patrimonios autónomos u otras formas asociativas, nacionales o extranjeras que, a partir de sus actividades como agentes económicos del mercado, contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras.

Los proveedores que participen en procesos de contratación suscriben los pactos de integridad que establece el Reglamento.

Artículo 28. Los Impedimentos para ser proveedor del Estado

Se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, con independencia del régimen legal de contratación aplicable e incluso en los contratos menores, las siguientes personas, de acuerdo al alcance y temporalidad que corresponda.

28.1 Impedimentos atribuidos a la persona.

	Personas con Impedimento	Identificación	Temporalidad	Alcance
1	Autoridades Tipo A	• El presidente de la República. • Los vicepresidentes de la República. • Los Congresistas de la República. • Los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República. • Los Miembros del Tribunal Constitucional • El Contralor General de la República • El Fiscal de la Nación	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación a nivel nacional.
		• Los ministros y viceministros de Estado. • Los Gobernadores. • Los Vicegobernadores.		

2	Autoridades Tipo B	• Los alcaldes. • Los Jueces Superiores de las Cortes Superiores de Justicia. • Los Titulares y miembros de los órganos colegiados del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Banco Central de Reserva del Perú y Junta Nacional de Justicia.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación en el ámbito de su sector y/o competencia territorial
3	Autoridades Tipo C	• Los consejeros Regionales. • Los Regidores.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial.
4	Autoridades tipo D	• Las Autoridades de la Gestión Administrativa y los titulares de Entidades Contratantes, distintos a las Autoridades Tipo A, B y C. • Los funcionarios públicos. • Los Directivos públicos. • Los Servidores de confianza	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo	En cualquier proceso de contratación de la Entidad Contratante a la que pertenecieron.
5	Autoridades tipo E	• Los directores de las empresas del Estado. • Los Miembros de los Consejos Directivos de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo,	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación de la Entidad Contratante de la cual forma parte el Directorio o Consejo Directivo, y en la Entidad Contratante a la que representan, según corresponda.
6	Los servidores públicos distintos a las autoridades tipo A, B, C, D y E, incluyendo a aquellos sujetos a carreras especiales y los trabajadores de las empresas del Estado.		Mientras tengan vínculo laboral con la Entidad y durante los seis meses siguientes de haber culminado el vínculo laboral.	En cualquier proceso de contratación a nivel nacional, salvo que se encuentre en algunas de las excepciones previstas en la Ley 28175. En los procesos de contratación de la Entidad siempre que, por la función desempeñada, dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses.
7	Personas naturales o jurídicas que hayan intervenido en las actuaciones	Aquellos que tengan intervención directa en las siguientes actuaciones: i) La determinación del requerimiento o la estimación del presupuesto, ii) La elaboración de algún documento del procedimiento de selección,	Durante el proceso de contratación correspondiente	En el proceso de contratación correspondiente.

	del proceso de contratación .	iii)La calificación y evaluación de las ofertas iv)La conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión.		

28.2 Impedimentos atribuidos al grado de parentesco con el impedido.

	Personas con Impedimento	Identificación	Temporalidad	Alcance
8	Parientes de las Autoridades Tipo A	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación a nivel nacional. Se exceptúa el impedimento, cuando las personas tipificadas ya venían contratando con una determinada entidad, por un tiempo mínimo de un (1) año, previo a la asunción del cargo por el familiar que genera el impedimento. Esta excepción sólo es válida en la entidad en la que se venía contratando
9	Parientes de las Autoridades Tipo B y C	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación en el ámbito de su sector y/o competencia territorial. Se exceptúa el impedimento, cuando las personas tipificadas ya venían contratando con una determinada entidad, por un tiempo mínimo de un (1) año, previo a la asunción del cargo por el familiar que genera el impedimento. Esta excepción sólo es válida en la entidad en la que se venía contratando
10	Parientes de las Autoridades Tipo D	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo	En cualquier proceso de contratación de la Entidad Contratante a la que pertenecieron. Se exceptúa el impedimento, cuando las personas tipificadas ya venían contratando con una determinada entidad, por un tiempo mínimo de un (1) año, previo a la asunción del cargo por el familiar que genera el

				impedimento. Esta excepción sólo es válida en la entidad en la que se venía contratando
11	Parientes de las Autoridades Tipo E	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	Durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes de haber culminado el ejercicio del cargo.	En cualquier proceso de contratación de la Entidad Contratante de la cual forma parte el Directorio o Consejo Directivo, y en la Entidad Contratante a la que representan, según corresponda. Se exceptúa el impedimento, cuando las personas tipificadas ya venían contratando con una determinada entidad, por un tiempo mínimo de un (1) año, previo a la asunción del cargo por el familiar que genera el impedimento. Esta excepción sólo es válida en la entidad en la que se venía contratando
12	Parientes de los servidores públicos distintos a las autoridades tipo A, B, C, D y E y los trabajadores de las empresas del Estado.	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	Mientras tengan vínculo laboral con la Entidad y durante los seis meses siguientes de haber culminado el vínculo laboral.	En cualquier proceso de contratación a nivel nacional, salvo que se encuentre en algunas de las excepciones previstas en la Ley 28175. En los procesos de contratación de la Entidad siempre que, por la función desempeñada, dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. Se exceptúa el impedimento, cuando las personas tipificadas ya venían contratando con una determinada entidad, por un tiempo mínimo de un (1) año, previo a la asunción del cargo por el familiar que genera el impedimento. Esta excepción sólo es válida en la entidad en la que se venía contratando
	Parientes de las personas naturales que hayan intervenido o hayan sido	Hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo al cónyuge y al concubino. Para	Durante el proceso de contratación	En el proceso de contratación

13	contratados para intervenir en las actuaciones del proceso contratación.	los efectos de la presente ley, el impedimento se extiende al progenitor del hijo de la persona impedida.	correspondiente	correspondiente.

28.3 Impedimentos atribuidos a las personas jurídicas y al tipo de representación del impedido

	Personas con Impedimento	Identificación	Temporalidad	Alcance
14	Personas jurídicas con fines de lucro donde las personas impedidas señaladas en los Grupos 1 y 2 tengan participación o hayan tenido participación dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, o al requerimiento en el caso de los contratos menores.	Personas jurídicas en las que dichas personas impedidas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social.	Se aplica la misma temporalidad dispuesta en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.	Se aplica el mismo alcance dispuesto en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.
15	Personas jurídicas sin fines de lucro en las que las personas impedidas señaladas en los Grupos 1 y 2 tengan participación o hayan tenido participación dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, o al requerimiento en el caso de los contratos menores.	Personas jurídicas en las que dichas personas impedidas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos.	Se aplica la misma temporalidad dispuesta en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.	Se aplica el mismo alcance dispuesto en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.
16	Personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde las personas impedidas señaladas en los Grupos 1 y 2 se desempeñen como miembros de los órganos de administración, apoderados o representantes legales.		Se aplica la misma temporalidad dispuesta en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.	Se aplica el mismo alcance dispuesto en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.
17	Personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas impedidas señaladas en los Grupos 1 y 2.		Se aplica la misma temporalidad dispuesta en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.	Se aplica el mismo alcance dispuesto en los Grupos 1 y 2, según la persona impedida que corresponda.
	Personas jurídicas que realicen o puedan			

18	realizar las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva.	Se entiende por integrantes a los representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares.	Durante el tiempo que la inhabilitación se encuentre vigente.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
19	Persona jurídica cuyos integrantes hayan sido sancionados con inhabilitación temporal o definitiva.	Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social. Se entiende por integrantes a los representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares.	Durante el tiempo que la inhabilitación se encuentre vigente.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
20	Personas que simulan otra persona jurídica.	Personas naturales o jurídicas que, encontrándose impedidas, constituyan persona jurídica del mismo rubro; o aquellas personas jurídicas que no encontrándose impedidas absorban o se fusionen con una persona jurídica impedida.	Mientras dure el impedimento de la empresa que origina el impedimento.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
21	Personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico, conforme se defina en el Reglamento.		Durante el procedimiento de selección,	En un mismo procedimiento de selección o ítem correspondiente, salvo cuando las personas del mismo grupo económico participen en forma consorciada.

28.4 Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusión en otros registros

	Personas con Impedimento	Identificación	Temporalidad	Alcance
22	Proveedores inhabilitados.	Personas naturales o jurídicas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción de inhabilitación temporal o inhabilitación definitiva.	Durante el tiempo de la inhabilitación.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.

23	Proveedores con multa impaga.	Personas naturales o jurídicas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado con multa y cuyo pago está pendiente.	Por el tiempo que se disponga en la medida cautelar a la que se refiere el régimen de infracciones y sanciones establecido en la presente Ley.	En todo proceso de contratación a nivel nacional
24	Personas condenadas ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.	Personas naturales o jurídicas que cuenten con sentencia consentida o ejecutoriada emitida en el país o el extranjero, por los delitos tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal Peruano, tales como concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países.	Por el plazo máximo previsto como pena para el delito	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
25	Personas que reconocen un delito ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.	Personas naturales o jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, según corresponda, reconocen ante alguna autoridad nacional o extranjera competente los delitos tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal Peruano, tales como concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países.	Por el plazo máximo previsto como pena para el delito	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
26	Personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y otros registros.	• Persona inscrita en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) o el que haga sus veces a nombre propio o a través de una persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. • Abogados inscritos en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional o profesionales inscritos en registros creados por ley que impidan contratar con el Estado. • Persona natural inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) o el que haga sus veces. • Persona natural inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) o el que haga sus veces. En este último no aplica el impedimento si, previamente a la suscripción del contrato, el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.	Durante la permanencia en el registro, o la vigencia de la sanción, según corresponda, salvo las disposiciones previstas para el REDAM.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
27	Proveedores con sanción firme por infracción a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.	Proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, salvo los casos de exoneración previstos en la Segunda Disposición. Complementaria Final del Decreto Legislativo 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y modificatorias	Durante los doce meses siguientes desde que la sanción quedó firme.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.

28	Personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas.		Durante la permanencia en el listado.	En todo proceso de contratación a nivel nacional.
29	Proveedores con contrato resuelto o declarado nulo por causa imputable a ellos	Las personas naturales o jurídicas que cuenten con contrato resuelto, a consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales o que tengan un contrato declarado nulo, por las causales previstas en los literales a), b) y e) del numeral 72.1 del artículo 72 de la presente ley	Desde la notificación de la resolución del contrato o de la nulidad del contrato, por causa imputable al contratista, y hasta doce (12) meses de transcurrida dicha notificación o hasta que el laudo emitido a su favor sea notificado, lo que ocurra primero.	En todo proceso de contratación de la Entidad Contratante que haya resuelto o declarado nulo el contrato

Artículo 29. La calificación exigible a los proveedores

La entidad califica a los proveedores de acuerdo a criterios objetivos, que pueden ser legales, técnicos, económicos, entre otros; siendo obligatoriamente parte principal en la calificación la experiencia y los años de desempeño, en el sector correspondiente, que acrediten documentalmente los proveedores al momento de postular al procedimiento de selección.

Adicionalmente, la experiencia de los profesionales que son integrantes de los equipos técnicos de los proveedores debe ser tomada en cuenta.

Artículo 30. La Participación en consorcio

30.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, según las exigencias establecidas en el procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente

30.2 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y/o la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. En tal caso, se aplica la sanción únicamente al consorciado que cometió la infracción.

30.3 Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer un número máximo

de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación, en función a la naturaleza de la prestación.

30.4 En el caso de empresas extranjeras, en su participación en consorcio para obras, supervisión y/o consultoría, se debe incluir obligatoriamente como integrante del consorcio a una empresa nacional con probada experiencia en la ejecución de contratos de obra, supervisión y consultoría, excluyendo a sucursales constituidas en el territorio peruano.

Artículo 31. La protección y promoción de la competencia y la prevención del delito

31.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, debe de remitir el hecho, dentro de los quince (15) días de detectada la conducta con toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que , de ser el caso, se inicie de oficio el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

31.2 Cuando el OSCE, tome conocimiento que un requisito establecido en los documentos del procedimiento de selección afecta la libre competencia, ordena a la Entidad que lo elimine sustentando técnica y jurídicamente su decisión

31.3 Cuando, el OSCE toma conocimiento de la comisión de un delito, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público.

TÍTULO IV
DE LOS ROLES DETERMINADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CAPITULO VIII
LOS ROLES DETERMINADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Artículo 32. Los roles de los participantes en los procesos de contratación

32.1 Los roles que cumplen los intervinientes en los procesos de contratación de la entidad contratante, son los siguientes:

a) **El Titular de la Entidad**:
Es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante.
b) **La Autoridad de la Gestión Administrativa**:
Es la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, ejerce las funciones previstas para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al Titular de la Entidad.
En el caso de los Ministerios, es la Secretaría General; en los Gobiernos Regionales, la Gerencia General Regional; en los Gobiernos Locales, la Gerencia Municipal; en los organismos públicos y en las empresas del Estado, la Gerencia General; en los Programas y Proyectos, el director ejecutivo; y, en las demás Entidades Contratantes, aquél que ejerza la máxima autoridad administrativa dentro de la Entidad Contratante.
c) **El Área Usuaria.**
Es la unidad de la organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras, programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades. Asimismo, es responsable de la adecuada formulación de sus requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, verificación de las obligaciones del contrato, así como la emisión de

su conformidad respectiva.

d) **El Área técnica estratégica**.
Es la unidad de organización a la que, dadas su especialidad y conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria para la formulación de requerimientos de otras unidades de la organización, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como, la verificación de las obligaciones del contrato y la emisión de la conformidad respectiva

e) **La dependencia encargada de las contrataciones**.
Es la unidad de organización responsable de los procesos de contratación de la entidad contratante, incluyendo la preparación de la estrategia de contratación. Puede asumir el rol de área técnica estratégica en los casos que corresponda, dadas sus funciones, especialidad y/o conocimiento técnico.
La Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación.

f) **Los compradores públicos**.
Son los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de las contrataciones que realizan las actividades relativas a la gestión de las contrataciones de la entidad contratante

32.2 En el Reglamento se establecen los casos en los que se conforman los comités y/o jurados en el marco de los procedimientos de selección.

32.3 La Autoridad de la Gestión Administrativa de la entidad contratante y el Titular de la Entidad pueden delegar, mediante resolución, las facultades que la presente Ley les otorga, salvo las excepciones previstas en el Reglamento.

La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento.

Artículo 33. Las responsabilidades en el proceso de contratación

33.1 La gestión y conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones, es realizada por los funcionarios y servidores de la entidad contratante.

33.2 Las entidades contratantes son responsables de prevenir y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación.

Artículo 34. La supervisión en el proceso de contratación

34.1 La Autoridad de la Gestión Administrativa es responsable de establecer e implementar las disposiciones y acciones que sean necesarias para supervisar los procesos de contratación, en cualquiera de sus fases. Así como la actuación de todas las personas de la entidad o terceros, que intervengan en estos.

34.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este.

34.3 Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un

inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. El reglamento establece las condiciones necesarias para su aplicación.

TÍTULO V
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO X
LAS GENERALES Y LA PLANIFICACIÓN

Artículo 35. La Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado

35.1 La Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado permite gestionar integradamente todos los procesos de contratación. Sobre esta plataforma se realizan las transacciones electrónicas, el intercambio de información y la difusión de las contrataciones del Estado. Es administrada por el OSCE.

35.2 La Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado es de uso obligatorio para las entidades contratantes, las que registran de manera obligatoria la información de todas las fases de los procesos de contratación.

35.3 Las actuaciones y actos realizados por esta plataforma tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, sustituyéndolos para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación en la citada Plataforma Digital.

Artículo 36. El Plan Anual de Contrataciones

36.1 **La formulación**: Cada Entidad debe programar el Cuadro de Necesidades en donde figuren todos los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas para un ejercicio fiscal, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional (POI), con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC)

36.2 **El Plan Anual de Contrataciones**: Es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.

El Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.

36.3 **El Contenido**: Su aprobación debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

36.4 **La Publicación:** La Entidad debe de publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, en el portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso

36.5 **El Requisito:** Es requisito que, para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la Comparación de Precios, los bienes, servicios u obras estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad.

Artículo 37. Las disposiciones generales del proceso de contratación

37.1 El proceso de contratación es el conjunto de actividades desarrolladas por las entidades contratantes con el objeto de abastecerse de bienes, servicios u obras, y consta de tres fases:

i) Las Actuaciones Preparatorias
ii) La Selección
iii) La Ejecución Contractual.

37.2 Las entidades contratantes, en la fase de selección, realizan procedimientos de selección competitivos, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley.

CAPITULO XI
LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artículo 38. El requerimiento

38.1 El requerimiento es el acto que da inicio al proceso de contratación. El área usuaria o área técnica estratégica, determina el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones.

38.2 El área usuaria o área técnica estratégica es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, así como los requisitos de calificación; además de justificar la contratación.

38.3 Alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se puede hacer, sin una justificación técnica que priorice el concepto de valor por dinero; la referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

38.4 En el caso de una compra pública de innovación es posible definir el requerimiento únicamente en atención a los objetivos concretos que se pretenden satisfacer.

38.5 El reglamento establece los mecanismos que pueden utilizar las entidades para la difusión de sus necesidades, con la finalidad de contar con mayor información para poder optimizar los requerimientos.

38.6 El requerimiento puede incluir que la prestación se ejecute bajo las modalidades de concurso oferta, llave en mano u otras que se establezcan en el reglamento.

Artículo 39. La interacción con el mercado

39.1 A través de la interacción con el mercado, las entidades contratantes determinan la existencia de oferta y de competencia, perfeccionan su requerimiento, estiman el presupuesto que se requiere para la contratación, y el mecanismo de contratación estratégica o procedimiento de selección más idóneo para proveerse de bienes, servicios u

obras.

39.2 El Reglamento establece los mecanismos y criterios de la interacción con el mercado. Adicionalmente, el Reglamento establece en qué casos el presupuesto estimado de la contratación se considera punto de referencia para las ofertas.

Artículo 40. La homologación de requerimientos

40.1 La estandarización de requerimientos es el proceso que se realiza para uniformizar los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios, u obras, en cuanto sea posible realizarlo.

40.2 Los instrumentos para la estandarización de requerimientos son la Ficha Técnica y la Ficha de Homologación, las cuales son de uso obligatorio para las entidades contratantes, con independencia del monto de contratación, salvo las excepciones previstas en el Reglamento.

Los citados instrumentos también son de uso obligatorio en aquellas contrataciones que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o se sujeten a otro régimen de contratación.

40.3 El proceso de estandarización de requerimientos para generar Fichas Técnicas es conducido y ejecutado por Perú Compras.

40.4 El proceso de estandarización de requerimientos para generar Fichas de Homologación es ejecutado por los Ministerios, a quienes les corresponde formular y aprobar las Fichas de Homologación dentro del ámbito de su competencia, con el acompañamiento de Perú Compras.

Artículo 41. El Valor Referencial y El Valor Estimado

41.1 La Entidad debe de establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación y actualización.

41.2 No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

41.3 En el caso de consultoría de obras, la entidad establece los detalles de la estructura del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado para confirmar el monto establecido.

41.4 En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el expediente técnico o estudio definitivo de la obra.

Artículo 42. El requisito de Certificación de Crédito Presupuestario para convocar procedimientos de selección

Es requisito obligatorio que, para convocar un procedimiento de selección, la entidad contratante debe de contar con la Certificación de Crédito Presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. De tal forma de garantizar que se cuenta con el recurso disponible y libre de afectación para comprometer el gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado.

La Certificación de Crédito Presupuestario es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esa facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Una vez expedida, la certificación se remite al área solicitante para que inicie los trámites respectivos relacionados.

Toda convocatoria y/o procedimiento de selección que no cuente con la certificación presupuestal, conforme a lo exigido en el párrafo anterior, será declarada nula.

Artículo 43. La prohibición de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar un proceso de contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, a través de la realización de más de un procedimiento de selección, que traiga como consecuencia contrataciones iguales o inferiores a doce (12) UIT, y así evadir el cumplimiento de la ley.

El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen fraccionamiento.

CAPITULO XII
LA SELECCIÓN

Artículo 44. Los procedimientos de selección

Una entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento.

Artículo 45. La Licitación pública y El Concurso Público

45.1 La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; mientras que, el concurso público se utiliza para la contratación de servicios. En cualquier caso, se aplica a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

45.2 El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público.

45.3 Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz.

Artículo 46. La Adjudicación Simplificada

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

Artículo 47. La selección de consultores individuales

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de

consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

Artículo 48. La Comparación de Precios

La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento.

Artículo 49. La Subasta Inversa Electrónica

49.1 La Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, gestionado por Perú Compras.

49.2 Las especificaciones, excepciones y condiciones del uso de la Subasta Inversa Electrónica se encuentran establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

Artículo 50. Las Contrataciones Directas

50.1 Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente, con un determinado proveedor, en el caso del cumplimiento de uno o varios de los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate con otra entidad pública, siempre que como consecuencia de un análisis de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.
b) Ante la ocurrencia o inminencia de las situaciones de desastre a que se refiere el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud; así como por situaciones que pongan en riesgo la seguridad o defensa del Estado, o el orden público.
c) Ante una situación de desabastecimiento declarada de acuerdo a ley, y sea debidamente comprobada mediante los informes técnicos y legales correspondientes, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. La Entidad debe poner en conocimiento de la Contraloría General de la República de la situación de desabastecimiento.
d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.
e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor.
f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación técnica y legal.

g) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores.
h) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones.
i) Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del predio, conforme lo que disponga el reglamento.
j) Cuando exista la necesidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo, por haberse perfeccionado, en contravención de los impedimentos establecidos en la Ley; o cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo; siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y ninguno de estos hubiere aceptado.

   Esta causal procede aun cuando haya existido un solo postor en el procedimiento de selección de donde proviene el contrato resuelto o declarado nulo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el párrafo anterior.
k) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados.

50.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, resolución de alcaldía en el caso de gobiernos locales, o mediante acuerdo del directorio, según corresponda. Las contrataciones directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional o concejo municipal. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable.

50.3 Este procedimiento de selección puede efectuarse a través de compras corporativas.

50.4 El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa.

50.5 En los supuestos de los literales b), c), del item 50.1 presente artículo, el perfeccionamiento de la contratación directa no podrá exceder de los tres (03) meses de haber culminado el período debidamente declarado en emergencia. En el caso del literal d), el perfeccionamiento de la contratación directa no podrá exceder de los seis (06) meses posteriores del acto en donde se decidió la contratación

Artículo 51. El rechazo de ofertas

51.1 Para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta que se encuentre por debajo del valor estimado y/o referencial si determina que, luego de haber solicitado al proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta, puede acreditar mediante razones objetivas el posible incumplimiento de los fines del contrato.

La entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y esta no se haya podido obtener.

51.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

Artículo 52. La declaratoria de desierto

52.1 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto, en la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento.

52.2 El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto.

52.3 Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de seguros patrimoniales, la entidad puede utilizar el procedimiento que determine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en la presente ley.

Artículo 53. La cancelación de un proceso de selección

53.1 La entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, basada en razones de fuerza mayor, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Una vez comprobada la desaparición de la necesidad, la entidad notifica a los participantes en el proceso mediante resolución las razones por las cuales se cancela el procedimiento de selección.

53.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas; salvo aquellos gastos administrativos que probadamente hayan realizado los proveedores ante la entidad

CAPÍTULO XIII
LOS MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Artículo 54. La estrategia de contratación

La estrategia de contratación es elaborada por la dependencia encargada de las contrataciones en cada entidad; esta contendrá, entre otros, el tipo de procedimiento de selección o mecanismo de contratación estratégica, el sistema de contratación, la verificación de la estandarización del requerimiento y la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación; asimismo, forma parte del expediente de contratación

Artículo 55. Los métodos especiales de contratación

55.1 Las entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco.

55.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y políticas de rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demás particularidades.

55.3 Las reglas especiales del procedimiento de cada acuerdo marco definen el monto a partir del cual el uso de catálogos electrónicos es obligatorio.

Artículo 56. La compra por encargo

56.1 Mediante convenio una entidad contratante puede encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

56.2 La encargatura cumple con los principios establecidos para la contratación pública nacional y de corresponder, con los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú.

56.3 El convenio de encargo debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de la entidad u organismo internacional encargado de remitir a la entidad encargante la documentación referida a la ejecución del proceso.

56.4 El Reglamento establece las condiciones y los procedimientos para el encargo.

Artículo 57. La compra centralizada

57.1 A través del método de la compra centralizada, se puede encargar a Perú Compras u a otra entidad por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, la realización de todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total, de bienes, servicios u obras.

57.2 Para tal efecto, las entidades encargantes están autorizadas a realizar la transferencia de partidas que corresponda a Perú Compras o a la entidad encargada. Tales transferencias son autorizadas mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el ministro del sector al que pertenece la entidad que habilita los recursos, cuando corresponda, para financiar las contrataciones objeto de encargo.

57.3 En caso que la totalidad de la ejecución contractual o parte de ella se realice en más de un ejercicio presupuestario, la entidad encargada debe incluir en su Programación Multianual Presupuestaria el monto estimado de la contratación que va a ejecutar en los años fiscales siguientes.

Artículo 58. La compra corporativa

58.1 Dos o más entidades contratantes pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, mediante un procedimiento de selección único, a fin de alcanzar condiciones más ventajosas.

58.2 Las entidades contratantes participan de las compras corporativas obligatorias a cargo

de Perú Compras, siempre y cuando su oferta sea económica y cualitativamente superior a la de otros posibles proveedores.

58.3 En las contrataciones de bienes, si dos (02) o más entidades contratantes pertenecientes a un mismo sector requieren de un mismo bien, las compras corporativas serán obligatorias a partir de la adquisición de quinientos (500) bienes y cuyo valor referencial total sea superior a 100 UIT.

Artículo 59. La compra pública de innovación

59.1 Las entidades contratantes utilizan la compra pública de innovación para la generación de soluciones innovadoras que son soportadas por actividades de investigación y desarrollo, cuando dicha solución no exista en el mercado o requiera de adaptaciones, ajustes o mejoras que impliquen la incorporación de elementos innovadores.

59.2 La compra pública de innovación conlleva la asunción de riesgos vinculados al proceso de innovación y, por lo tanto, al diseño de medidas de mitigación de dichos riesgos.

59.3 La titularidad de los derechos de propiedad intelectual generados de las actividades de investigación y desarrollo, son de la entidad contratante, del contratista o de ambos, de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento.

59.4 La compra pública de innovación se lleva a cabo a través de un procedimiento de selección, conforme a las condiciones indicadas en el Reglamento.

Artículo 60. Los Acuerdos Marco

60.1 Mediante Acuerdos Marco, las entidades contratantes realizan por etapas el proceso de contratación, determinando en un primer momento los proveedores y condiciones que van a formar parte del Acuerdo Marco y en otro la adjudicación del contrato, entre otros aspectos.

60.2 El Reglamento establece las condiciones y requisitos para la utilización del Acuerdo Marco

Artículo 61. Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

61.1 Las entidades contratantes contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

61.2 La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco resulta obligatoria de acuerdo a los plazos que establezca Perú Compras. El Reglamento establece las condiciones para el uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como sus excepciones.

61.3 Perú Compras define los bienes y servicios que se incluyen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. El Reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, los criterios para selección de proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores, sus procedimientos y demás particularidades

Artículo 62. Los procesos de selección competitivos

62.1 Las entidades contratantes realizan procedimientos de selección competitivos para

efectuar sus contrataciones, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento.

62.2 Son procedimientos de selección competitivos, la licitación pública, el concurso público, así como sus modalidades diferenciadas.

62.3 Los procedimientos de selección competitivos que establece el Reglamento pueden incluir reglas que se adapten específicamente a los objetos contractuales, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, la envergadura, la complejidad y la especialización de estos, entre otros.

Artículo 63. Los procesos de selección no competitivos
63.1 Las entidades contratantes se encuentran facultadas para contratar directamente, es decir mediante un procedimiento de selección no competitivo, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate directamente con otra entidad contratante, siempre que en razón del principio de valor por dinero resulte más eficiente para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.
b) Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia debidamente establecida
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente establecida, que afecte o impida el funcionamiento de la entidad contratante o el cumplimiento de sus funciones.
d) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor.
e) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales.
f) Para contratar medios de comunicación, tales como el radial, televisivo, escrito, entre otros, para fines de publicidad estatal conforme las normas de la materia.
g) Para la adquisición de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de investigación, desarrollo e innovación, relacionados al ejercicio de las funciones de la entidad. El presente supuesto se establece para entidades públicas que pertenezcan al nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o aquella que la sustituya; y que, a su vez, cuenten con una certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación o por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), según corresponda.
h) Para la adquisición de inmuebles de propiedad privada y para el arrendamiento de inmuebles de propiedad privada, pudiendo incluir el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del inmueble.
i) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores y miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, de acuerdo con lo establecido en las normas de la materia.
j) Para la asesoría legal y/o técnica en la defensa de las entidades contratantes en cualquier etapa de los procesos arbitrales o judiciales, lo que puede incluir el asesoramiento previo al inicio de los referidos procesos.
k) Para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado o por la verificación que, durante el procedimiento de selección, se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta, previo descargo del contratista; siempre que el contrato derive de un procedimiento de

selección competitivo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos y contratos de supervisión vinculados a los saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a las causales antes señaladas.

l) Para contratar servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

m) Las contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que hayan sido declaradas de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, mediante Decreto Supremo, Proyecto de Ley refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector correspondiente. Para efectuar dicha contratación, se requiere previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.

63.2 El Reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de selección no competitivo

CAPÍTULO XIV
LAS CONTRATACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

Artículo 64. La Situación de Emergencia

Los siguientes supuestos constituyen una situación de emergencia:

a) Las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia y desastre del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
b) Las emergencias sanitarias.
c) Los estados de alerta o emergencia fito y zoosanitaria.
d) Las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado, o el orden público.
e) Las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación.

Las situaciones de emergencia o los estados de emergencia deben de ser declarados por las entidades correspondientes de acuerdo a las normas de la materia.

Artículo 65. Las contrataciones para la prevención y atención de situaciones de emergencia.

65.1 Para prevenir y prepararse ante el riesgo de emergencias y desastres, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras utilizando procedimientos de selección competitivos, considerando las estrategias de ejecución contractual para emergencias, según lo dispuesto en el Reglamento.

65.2 Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia, debidamente establecida de acuerdo a ley, las entidades pueden contratar bienes, servicios y obras, relacionados a la misma, utilizando el procedimiento de selección no competitivo; o con proveedores no domiciliados en el país, cuando se cumpla uno de los siguientes supuestos:

a) No sea posible realizar la contratación a través de los mecanismos de contratación estratégica o los procedimientos de selección de la presente Ley.
b) El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.
c) Las contrataciones relacionadas a actividades de promoción y participación del Perú que tengan carácter oficial en ferias, cumbres, competiciones y similares, en materia comercial, de inversiones, exportaciones, turismo, así como de imagen país, en territorio extranjero.

Los supuestos señalados precedentemente se sustentan con informe técnico y legal.

65.3 Para el caso de contrataciones de inversiones de rehabilitación, que sucedan como consecuencia de la ocurrencia de una situación de emergencia, debidamente establecida de acuerdo a ley, dentro del plazo de un año computado desde la ocurrencia de la emergencia y/o desastre, conforme las disposiciones señaladas en el Reglamento, las entidades contratantes utilizan el procedimiento de selección no competitivo.

Luego de transcurrido el referido plazo, se utilizan los procedimientos de selección competitivos que establece el Reglamento para las inversiones de rehabilitación y para la reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.

65.4 Perú Compras gestiona compras centralizadas para situaciones de emergencia conforme a las disposiciones señaladas en el Reglamento.

CAPÍTULO XV
EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Artículo 66. El contrato

66.1 El contrato regulado por la presente Ley es el acuerdo celebrado, entre una entidad contratante y un proveedor, con la finalidad de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras. El Reglamento establece el procedimiento para su perfeccionamiento.

66.2 Este contrato debe incluir obligatoriamente las siguientes cláusulas:

a) Garantías
b) Anticorrupción
c) Solución de controversias
d) Resolución de contrato por incumplimiento.
e) Gestión de riesgos. (En el caso de contratos relacionados a obras)

66.3 En los contratos relacionados a obras deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento.

66.4 En el caso de la contratación de ejecución de obras, la entidad obligatoriamente debe de contar con la disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. Esta información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección.

66.5 Para el caso de consultoría y ejecución de obras, las entidades contratantes pueden

utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que así lo determine la estrategia de contratación. La ejecución de estos contratos se somete a control gubernamental simultáneo y está a cargo de la Contraloría General de la República.

66.6 Cuando los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional establezcan, que el incumplimiento del plazo, para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos, o con el no reconocimiento de la reclamación; el referido plazo es considerado como uno de caducidad.

66.7 Las entidades contratantes determinadas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud mediante resolución ministerial pueden celebrar Acuerdos de Riesgo Compartido para contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo. Los Acuerdos de Riesgo de Compartido pueden ser financieros, de desempeño o híbridos. El reglamento establece los criterios y condiciones para el uso de los referidos Acuerdos, así como procedimientos de selección específicos para su contratación.

66.8 Tratándose de obras, el reglamento establece los supuestos en que se requerirá de supervisor de obra, inspector de obra u otro.

66.9 Para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo completo, estos no podrán prestar servicios en más de una obra a la vez.

Artículo 67. La garantía

67.1 El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado.

67.2 Las garantías otorgadas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y/o prestaciones accesorias, por el monto diferencial de la propuesta y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones, ejecución y excepciones son regulados en el reglamento.

67.3 En el caso de las garantías financieras éstas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la entidad contratante, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o de corresponder, estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

67.4 En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la entidad contratante.

67.5 El reglamento establece las disposiciones referidas a la constitución de un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba el contratista a título de adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.

67.6 El reglamento establece mecanismos alternativos para asegurar la suscripción del contrato, en los casos que corresponda

Artículo 68. La modificación contractual

68.1 Los contratos celebrados dentro del alcance de la presente Ley y su reglamento pueden modificarse, por acuerdo de las partes, con la finalidad de alcanzar de manera más eficiente, los objetivos del contrato. La modificación es aprobada por la Autoridad de la Gestión Administrativa, salvo los supuestos establecidos en la presente Ley y el reglamento.

68.2 Las modificaciones contractuales no pueden afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en aplicación del Principio de Equidad.

68.3 Los supuestos para una modificación del contrato son:

a) La ejecución de prestaciones adicionales.
b) La reducción de prestaciones.
c) La autorización de ampliaciones de plazo.
d) Otros contemplados en el Reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.

68.4 La Autoridad de la Gestión Administrativa puede autorizar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales para el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios y consultorías hasta por el mismo porcentaje.

68.5 Para el caso de obras, la Autoridad de la Gestión Administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales; hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Asimismo, puede reducir hasta por el mismo porcentaje.

68.6 Excepcionalmente, el Titular de la Entidad, en el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista; puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, siempre que cuente con los recursos necesarios y autorización previa de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, conforme las condiciones establecidas en el Reglamento.

68.7 La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir el pronunciamiento al que se refiere el numeral anterior. En el caso de adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite previo al pago.

68.8 En el caso de consultorías de obras y obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, no son aplicables las disposiciones referidas a la aprobación de prestaciones adicionales previstas en el presente artículo, sino que se rigen por lo dispuesto en los propios contratos. Las variaciones a los contratos de obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto, conforme a las condiciones

establecidas en el Reglamento.

68.9 Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República.

Para el cálculo del límite establecido, solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.

68.10 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

68.11 Los Acuerdos de Riesgo Compartido para contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo, se encuentran exceptuados de los límites establecidos en los numerales precedentes, sujetándose a las disposiciones de los respectivos contratos.

68.12 Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad.

68.13 El Reglamento establece las condiciones para la autorización, ejecución y pago de las prestaciones adicionales de la supervisión de la obra.

Artículo 69. La cesión de derechos y de posición contractual

Salvo que exista alguna disposición legal o reglamentaria que lo prohíba, el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de terceros o de un fideicomiso. Las Entidades Contratantes pueden ceder su posición contractual, con conocimiento de la otra parte, sin necesidad de aprobación previa o posterior. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.

Artículo 70. La resolución del contrato

70.1 Las partes puede resolver, total o parcialmente el contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El suceso de un caso fortuito o de fuerza mayor, el cual imposibilite la continuación del contrato.
b) El incumplimiento de alguna obligación contractual, por una causa atribuible a la parte que incumple.

c) El hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) El incumplimiento de la Clausula Anticorrupción.
e) La presentación de documentación falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
f) La configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo a los supuestos que se establezcan en el Reglamento para su aplicación.

70.2 En el caso de que la resolución del contrato se produzca por una causa imputable a una de las partes, corresponde a la parte causante, resarcir los daños y perjuicios acreditados.

70.3 En el caso de corrupción de funcionarios o servidores por parte del contratista, no corresponde el pago de resarcimiento por daños y perjuicios, aun para aquella parte que no haya propiciado el acto de corrupción.

70.4 El Reglamento establece las condiciones y procedimientos para resolver los contratos.

Artículo 71. Los adelantos y los fideicomisos

71.1 La Entidad Contratante puede entregar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato en las condiciones que se establezca en la estrategia de contratación.

71.2 Estos adelantos tienen que ser obligatoriamente garantizados financieramente al 100%, por el receptor del adelanto.

71.3 El reglamento establece los tipos, condiciones y demás criterios para otorgar los adelantos y para su amortización.

71.4 Tratándose de la ejecución de obras, la entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento que el contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título de adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El reglamento desarrolla los requisitos y condiciones para la operatividad de la figura del fideicomiso.

Artículo 72. Los Pagos

72.1 Las entidades contratantes deben de realizar el pago al contratista de forma oportuna, luego de verificada la correcta ejecución de la prestación contractualmente establecida y cumplido el procedimiento administrativo que corresponda, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, en el caso de haber sido considerada esta posibilidad en el contrato.

Excepcionalmente, el pago puede realizarse parcial o íntegramente al inicio del contrato únicamente cuando este sea condición exclusiva de un tipo particular de mercado para la ejecución de las obligaciones a cargo del proveedor para la entrega de bienes o la prestación de los servicios, conforme las disposiciones que establece el Reglamento.

72.2 En caso de retraso en el pago por parte de la entidad contratante, salvo que se deba a un caso fortuito o de fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables que causaron la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad Contratante en caso sea la acreedora.

72.3 El reglamento establece las condiciones para la utilización del fideicomiso como forma de pago.

Artículo 73. Las responsabilidades en la ejecución contractual

73.1 La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar de forma correcta y oportuna la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato.

73.2 El contratista puede subcontratar, previa autorización de la entidad contratante, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato conforme las condiciones establecidas en el reglamento. En este caso, el contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la entidad contratante.

73.3 En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad por la calidad de la infraestructura o los vicios ocultos, que corresponde de acuerdo a las características técnicas del material, el proceso constructivo o el diseño; no puede ser inferior a siete años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

73.4 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo y así se haya determinado en la estrategia de contratación.

73.5 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, el contratista es responsable por errores, deficiencias técnicas y/o procedimentales, o por vicios ocultos, tales circunstancias pueden ser reclamadas por la entidad contratante por un plazo no menor de tres años después de la conformidad de obra.

En los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la responsabilidad por defectos en la prestación del servicio no puede ser inferior a la cantidad de años de responsabilidad para el contratista bajo el contrato de obra sobre el que se realizó la supervisión.

73.6 Para los contratos de ejecución de obra, los límites a la indemnización que deriven de la responsabilidad la calidad o por los vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato.

73.7 Todos los contratos incluyen una cláusula de no participación en prácticas corruptas, bajo sanción de nulidad.

Artículo 74. La nulidad del contrato

74.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, cuando contravengan las normas legales, cuando contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

74.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución

recaída sobre el recurso de apelación.

La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Después de celebrados los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
b) Cuando se verifique que, durante el procedimiento de selección, se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta, previo descargo del contratista.
c) Cuando se haya suscrito, a pesar de encontrarse en trámite un recurso de apelación.
d) Cuando se haya suscrito prescindiendo del procedimiento de selección competitivo, en caso de corresponder, o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo o un supuesto excluido de la presente Ley.
e) Cuando por sentencia consentida o ejecutoriada, o por reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera, se evidencie que, durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, este, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal a que hubiere lugar.

74.3 El instrumento que dispone la declaración de nulidad del contrato determina, en caso corresponda, el inicio del deslinde de responsabilidades.

74.4 Aun cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad del contrato, la Autoridad de la Gestión Administrativa puede autorizar la continuación de su ejecución, previos informes técnico y legal favorables que sustenten tal necesidad, basada en un análisis de valor por dinero orientado al cumplimiento de la finalidad pública del contrato y de los principios que rigen esta Ley, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que corresponda. Esta facultad es indelegable.

TÍTULO VI
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPITULO XVI
LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 75. Las disposiciones generales

Las discrepancias que surjan entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y/o las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, solamente pueden

dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través de dicho recurso se puede impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

No se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo y las actuaciones que establece el Reglamento.

Artículo 76. El recurso de apelación

76.1 El recurso de apelación solo puede interponerse después del otorgamiento de la buena pro, de la declaración de desierto, o de publicados los resultados de adjudicación en un procedimiento de selección y/o en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

76.2 El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea igual o superior a setenta (70) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

En los demás casos, el recurso de apelación es conocido y resuelto por la Autoridad de la Gestión Administrativa de la Entidad Contratante, cautelando que no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por la Autoridad de la Gestión Administrativa o el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

76.3 Se debe otorgar una garantía financiera a favor de la entidad contratante o del OSCE, según corresponda por interposición de un recurso de apelación. El monto de la garantía es de tres por ciento (3%) de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar, de acuerdo a los límites establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

76.4 La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

76.5 En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones señaladas en el presente artículo para la entidad contratante, son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente.

76.6 La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el presente artículo deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.

CAPITULO XVII
LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 77. Las disposiciones generales

77.1 Las controversias surgidas durante la ejecución contractual se resuelven por

conciliación, arbitraje, Junta de Resolución de Disputas y/o por otros mecanismos de resolución de disputas que se prevean en los contratos.

77.2 El inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario, de acuerdo al plazo y condiciones establecidos en el Reglamento.

77.3 Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Contraloría General de la República, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje o Junta de Resolución de Disputas, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad si pueden ser sometidas a arbitraje o Junta de Resolución de Disputas.

77.4 Para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se requiere formar parte de las nóminas de una Institución Arbitral o Centro de Resolución de Disputas que se encuentre en el Listado que administra OSCE, así como cumplir las cualificaciones que establece el Reglamento.

77.5 La incorporación en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros que administran Juntas de Resolución de Disputas que administra el OSCE, es constitutivo. La exclusión o suspensión de dichos registros impide el ejercicio de la administración de arbitrajes o de Juntas de Resolución de Disputas respecto a controversias en el ámbito de aplicación de la presente Ley.

Artículo 78. La Junta de Resolución de Disputas

78.1 La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes resuelvan eficientemente las controversias que surjan en contratos de bienes, servicios u obras desde el inicio del plazo de ejecución hasta el pago final o la liquidación total, según corresponda.

78.2 El Reglamento determina en qué casos es obligatorio o facultativo que los contratos de bienes, servicios y obras contemplen una cláusula de sometimiento a la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo de solución de controversias, previo al arbitraje, la cual identifica el Centro de Administración de Junta de Resolución de Disputas a cargo de su administración, el cual debe encontrarse el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas.

78.3 La Junta de Resolución de Disputas tiene las siguientes funciones, entre otras que se establecen en el Reglamento:

a) Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y/o técnico; y,
b) Resolver controversias técnicas y contractuales.

78.4 La Junta de Resolución de Disputas resuelve controversias ocurridas a través de decisiones. No puede conocer controversias relativas a la validez, nulidad, o eficacia del contrato. Las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas tienen carácter obligatorio y son de inmediato cumplimiento.

78.5 Las partes tienen un plazo de caducidad de quince días calendario para someter sus controversias a decisión de la citada Junta desde la fecha en que cualquiera de las partes

comunica a la otra su desacuerdo con la materia de la que se trate, y, por ende, el surgimiento de una controversia.

78.6 Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la Junta de Resolución de Disputas su desacuerdo total o parcial con la decisión en el plazo indicado en el numeral anterior o si, habiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro de los plazos de caducidad regulados en la presente Ley, la decisión de la Junta de Resolución de Disputas adquiere mérito ejecutivo.

78.7 El procedimiento ante la Junta de Resolución de Disputas es un presupuesto de arbitrabilidad, en aquellos contratos en los que se haya contemplado la inclusión de una cláusula de sometimiento a esta Junta.

Artículo 79. La Conciliación

79.1 Las partes pueden pactar en el contrato la conciliación como mecanismo de solución de las controversias, previo al inicio del arbitraje. Son controversias materias de conciliación, las siguientes:

a) La resolución de contrato
b) La ampliación del plazo contractual
c) La recepción y conformidad de la prestación
d) Las valorizaciones y/o metrados
e) La liquidación de contrato
f) Los temas que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato
g) Otras que disponga el Reglamento.

La nulidad de contrato no es materia de conciliación.

79.2 La conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los quince días calendario de surgida la controversia, y es llevada a cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio. En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con acuerdo parcial, el plazo para acudir al arbitraje respecto de las materias no conciliadas se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación.

79.3 La decisión de conciliar se basa en el Principio de Eficacia, considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos de un eventual proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Asimismo, se consideran los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio.

Artículo 80. El Arbitraje

80.1 Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo que lo contrario se halle expresamente previsto en la ley.

80.2 En todos los casos, bajo responsabilidad de la Autoridad de la Gestión Administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula incluida en el contrato.

80.3 El arbitraje al que se refiere la presente Ley es de derecho y se desarrolla en idioma

español. Puede ser ad hoc sólo en los casos en los que la cuantía de la contratación no supere las diez UIT. En todos los demás casos es institucional, y el convenio arbitral debe identificar la institución que administra el arbitraje, la cual deberá encontrarse en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de disputas.

Todo pacto en contrario es nulo y, en consecuencia, son aplicables las disposiciones de la presente Ley.

80.4 El arbitraje es resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por tres (3) miembros, según el acuerdo de las partes en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral aplicable, a falta de acuerdo o existiendo dudas sobre el mismo, el arbitraje es resuelto por árbitro único a no ser que la complejidad de las controversias o la cuantía de las mismas, justifique la conformación de un tribunal arbitral.

80.5 El arbitraje que verse sobre las controversias sobre la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado en un plazo máximo de quince días calendario desde la notificación de los actos materia de controversia.

80.6 En todas las demás controversias, cualquiera de las partes da inicio al arbitraje, como máximo, dentro de los quince días calendario siguientes a:

a) La entrega del bien final, en el caso de los contratos de adquisición de bienes,
b) La presentación del entregable final, en el caso de los contratos de prestación de servicios; y,
c) La entrega de la obra, en el caso de los contratos de obra.

80.7 El cómputo del plazo regulado en los numerales 78.5 y 78.6 del presente artículo tiene las siguientes excepciones:

a) Cuando con posterioridad a las actuaciones señaladas en el numeral 78.5 aún se encuentre pendiente la decisión de la Junta de Resolución de Disputas, el plazo se computa desde la fecha en que se emita la decisión de la Junta o en la fecha en que esta quede disuelta.
b) En las controversias referidas a la conformidad del bien, servicio u obra, el plazo se computa desde la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.
c) En las controversias referidas a la liquidación del contrato de obra, el plazo se computa desde la culminación del procedimiento de liquidación.
d) En las controversias referidas al pago final o prestaciones post pago de bienes y servicios, el plazo se computa desde la fecha en que se produce el pago final, o de vencido el plazo para realizar el pago final, o la prestación post pago materia de controversia.
e) En las controversias referidas a defectos o vicios ocultos, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta sesenta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en la Ley.

80.8 Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el plazo es de diez días calendario desde la notificación de los actos materia de controversia.

80.9 Los plazos señalados en el presente artículo son de caducidad.

80.10 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes a través de la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado para efecto de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

80.11 El OSCE aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación a los arbitrajes ad hoc, el incumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho código constituye un incumplimiento al encargo como árbitro

CAPITULO XVIII
LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN CONTRATOS ESTÁNDAR, ESPECIALES, CAUTELARES Y OTROS

Artículo 81. Los medios de Solución de Controversias en contratos estándar de ingeniería y construcción

En el caso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la entidad contratante puede optar por los medios de solución de controversias que en ellos se contemplen, los cuales se regulan según lo expresado en las cláusulas pertinentes en el propio contrato.

En caso no incluyan una cláusula que exprese que la decisión final es vinculante para las partes, la entidad contratante propone una cláusula particular o modificatoria para regularlos en ese sentido.

Artículo 82. Las Medidas Cautelares

82.1 Las medidas cautelares que se presentan, tanto en la vía judicial como en la arbitral, incluyendo las emitidas en arbitrajes de emergencia, se rigen por las siguientes reglas:

a) Es competente para resolver las solicitudes cautelares interpuestas antes de la constitución del tribunal arbitral, en donde no sea de aplicación el arbitraje de emergencia, el juez subespecializado en lo comercial o, de no existir tal subespecialidad, el juez civil.

   La competencia por razón del territorio corresponde al juez del lugar señalado por la entidad contratante como su domicilio en el correspondiente contrato. Esta competencia es incuestionable y puede ser declarada de oficio por el juez como justificación para declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada. Constituye causal de nulidad las medidas cautelares otorgadas por la autoridad judicial inobservando el presente literal.
b) La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.
c) No es procedente la concesión de una medida cautelar por el juez o el tribunal arbitral sin traslado previo a la contraparte.
d) Previa a su decisión, el juez o el tribunal arbitral, según corresponda, deben evaluar la irreversibilidad de la medida, así como el perjuicio que de esta se derive contra el interés público.

82.2 En todos los casos en que el contratista solicite una medida cautelar ya sea tanto en la vía judicial como la arbitral, ésta se encuentra supeditada al ofrecimiento de una contra cautela en favor de la entidad contratante, la cual cumple las siguientes condiciones:

a) La contra cautela se acredita únicamente con la presentación de una carta fianza bancaria, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, en favor de la entidad contratante, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, con una vigencia no menor a ciento ochenta (180) días, la cual se mantiene vigente durante todo el tiempo de duración de los efectos de la medida cautelar, bajo apercibimiento de cancelación automática de esta última.
b) Las empresas que emiten la fianza bancaria deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior y estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
c) El juez o el tribunal arbitral, según corresponda, que reciba la solicitud cautelar verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de recibir la fianza bancaria, constituyendo causal de nulidad de la medida cautelar en caso ésta se conceda con inobservancia de tales requisitos.
d) En ningún caso procede admitir como contra cautela la caución juratoria del solicitante.
e) El valor de la contra cautela no es menor a la garantía de fiel cumplimiento en los casos que la medida cautelar se refiera a pretensiones relativas a la validez, resolución y/o eficacia del contrato. Si la controversia se refiere a una pretensión cuantificable y el monto en disputa es menor a la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la contra cautela es equivalente al monto de la pretensión a la que se refiere la solicitud cautelar.

82.3 No proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar y/o retrasar el inicio y/o continuidad de la ejecución de obras y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial.

82.4 En todo lo no previsto y, siempre que no se opongan a la presente norma, se aplica el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, o el Código Procesal Civil, en ese orden de prelación.

Artículo 83. La Denegatoria Ficta

83.1 En el caso que la entidad contratante o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelva ni notifique sus resoluciones dentro del plazo que establezca el Reglamento, los interesados consideran denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.

83.2 En estos casos, la entidad contratante o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantía presentada al momento de interponer el recurso de apelación.

TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO XVII
LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 84. Las infracciones y sanciones administrativas a postulantes, proveedores, contratistas y subcontratistas

84.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, postulantes a proveedores, contratistas y subcontratistas, cuando incurran en alguna de las siguientes

infracciones:

a) Se desista o retire injustificadamente su oferta.
b) Se incumpla injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar Acuerdos Marco.
c) Se subcontrate prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en un porcentaje mayor al permitido por el Reglamento, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o esté impedido parar contratar con el Estado.
d) Se niegue injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.
e) Se suscriba contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o se suscriba contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
f) Se elabore expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver oportunamente las consultas formuladas por la Entidad Contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, ocasionando retraso en su ejecución.
g) Se supervise la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación ocasionando perjuicio económico a las entidades contratantes.
h) Se perfeccione el contrato, luego de notificada la suspensión en la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado o recomendación de nulidad por el OSCE o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el ejercicio de sus funciones.
i) Se contrate con el Estado estando impedido conforme a Ley.
j) Se ocasione que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos los que se perfeccionen a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
k) No se proceda al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad contratante, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.
l) Se presente información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OSCE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OSCE, la ventaja o el beneficio debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.
m) Se presente documentos falsos o adulterados a las Entidades Contratantes, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OSCE, o a Perú Compras.
n) Se supervise obras con deficiencias o información equivocada

84.2 Para los Contratos Menores, solo son aplicables las infracciones previstas en los

literales d), e), i), j), l), y m) del numeral precedente del presente artículo.

84.3 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado por las infracciones citadas en el presente artículo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:

Sanción	Definición	Temporalidad	Alcance
Multa	Obligación pecuniaria impuesta al infractor que consiste en pagar un monto económico. No menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al veinte por ciento (20%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una UIT. En el caso de los incisos c), e), h), i), l) y m) no menor del veinte por ciento (20%), de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a tres (03) UIT. Si no se puede determinar el monto de la oferta económica o del contrato se impone una multa entre una (1) y quince (15) UIT. En el caso de los Contratos Menores, el Tribunal de Contrataciones del Estado puede imponer una multa por debajo de los montos indicados.	La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor.	En los supuestos de infracción establecidos
Inhabilitación temporal	Consiste en la privación, por un periodo determinado, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección y en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de contratar con el Estado.	La inhabilitación se mantiene por el tiempo establecido en la sanción. Esta inhabilitación es no menor de seis meses, ni mayor de treinta y seis meses. En el caso de la infracción prevista en los literales c), e), h), i), l) y m), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis meses	En los supuestos de infracción previstos a partir de la segunda sanción impuesta al mismo proveedor. En el supuesto de infracción previsto en los literales c), e), h), i), l) y m) a partir de la primera sanción. Incluye Contratos Menores
	Consiste en la privación		

Inhabilitación definitiva	permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como de contratar con el Estado.	Inhabilitación permanente	En los supuestos de infracción previstos a partir de la tercera sanción impuesta al mismo proveedor. En el supuesto de infracción previsto en los literales c), e), h), i), l) y m) a partir de la segunda sanción. Incluye Contratos Menores

Artículo 85. Las infracciones y sanciones administrativas a los profesionales del plantel técnico de los proveedores.

85.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los profesionales que sean propuestos para integrar los planteles técnicos de los proveedores, cuando incurran en las siguientes infracciones:

a) Se incumpla con la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita.
b) Se desempeñe como proyectista o equivalente en el plantel técnico de un contrato por el que un proveedor fue sancionado por el literal f) del numeral 84.1 del artículo 84 de la presente Ley. Salvo que pueda comprobar técnicamente que la deficiencia no era atribuible al profesional.
c) Se forme u hubiere formado parte como jefe de supervisión o equivalente en el plantel técnico de un contrato por el que un proveedor fue sancionado por el literal g) del numeral 84.1 del artículo 84 de la presente Ley.
d) Se presente documentos falsos o adulterados o información inexacta a los proveedores y/o contratistas para que ésta sea presentada a la entidad contratante, siempre que el Tribunal de Contrataciones del Estado hubiera determinado que dicho proveedor y/o contratista ha incurrido en las infracciones previstas en los literales l) y m) del numeral 84.1 del artículo 84 de la presente Ley por la presentación de dichos documentos.

85.2 La sanción que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, es la imposibilidad de integrar el plantel técnico de proveedores del Estado en los procedimientos de selección competitivos o no competitivos o en la ejecución contractual de un contrato ya vigente, por un periodo de entre dos a cinco años. En el caso de estar comprendido en el inciso d) del numeral 85.1 del artículo 85 de la presente ley, la imposibilidad es por 30 años

85.3 El procedimiento sancionador a los profesionales del plantel técnico de los proveedores se realiza de manera independiente al procedimiento sancionador al que hace referencia el artículo 82 de la presente Ley.

85.4 Los profesionales sancionados por las infracciones del presente artículo son incluidos en el Listado de profesionales no elegibles para integrar el plantel de profesionales propuestos por proveedores del Estado, el cual es administrado por el OSCE.

Artículo 86. Las consideraciones para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

86.1 Los criterios de graduación de la sanción son establecidos en el reglamento. El Tribunal de Contrataciones del Estado debe motivar su decisión de graduar la sanción.

86.2 La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya perfeccionados a la fecha en que la sanción queda firme.

86.3 El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposición de la sanción, el régimen de caducidad y demás reglas necesarias. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en la presente Ley; tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante.

86.4 En caso que, luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el administrado reconozca en forma expresa su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, tal acción se considera para la graduación de la sanción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

86.5 Las infracciones establecidas en la presente norma para efectos de las sanciones prescriben a los cinco años de cometida, conforme a lo señalado en el Reglamento. Tratándose de la infracción contenida en el literal m) del numeral 84.1 del artículo 84 de la presente Ley, la sanción prescribe a los treinta años de cometida la infracción.

86.6 Cuando para la determinación de responsabilidad sea necesario contar previamente con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador.

86.7 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) incluye las sanciones impuestas a los proveedores.

86.8 En caso de reorganización societaria, el Tribunal de Contrataciones del Estado inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso el Tribunal determine su existencia.

86.9 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona con inhabilitación definitiva los casos en los que el proveedor ya cuenta con sanción y se determina que corresponde sancionarlo nuevamente por la comisión de alguna de las infracciones previstas en los literales i), j), k), l) y m) del numeral 84.1 del artículo 84 de la presente Ley.

Artículo 87. Las sanciones administrativas aplicables a las Instituciones Arbítrales y a los Centros de administración de Juntas de Resolución de Disputas

87.1 El OSCE sanciona a los Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que se encuentren en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que administra el OSCE, cuando incurran en las infracciones tipificadas en el Reglamento. Las referidas infracciones sancionan las siguientes conductas:

a) La negativa, obstrucción o resistencia al ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización.

b) El no proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OSCE solicite para poder ejercer sus funciones supervisoras ni aquella que, conforme a la presente ley y su Reglamento, deba remitir.
c) La presentación de documentación falsa y/o inexacta ante el OSCE.
d) El no velar que sus árbitros y/o adjudicadores, que conforman sus nóminas, cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su Reglamento, para poder ejercer como Árbitros o Adjudicadores.
e) El no sancionar a los Árbitros y/o Adjudicadores, que conforman sus nóminas, cuando incumplan con las disposiciones expresamente establecidas en la ley o su Reglamento, para el desarrollo del arbitraje, solicitud de arbitraje de emergencia, o la Junta de Resolución de Disputas en el que participa.
f) El no hacer cumplir las disposiciones establecidas en su Código de Ética.
g) El no mantener los requisitos y condiciones que dieron origen a su incorporación en el Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas.

87.2 Las sanciones que aplica el OSCE por las infracciones tipificadas en el Reglamento, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son las siguientes:

a) Amonestación.
b) Multa.
c) Suspensión del Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que administra el OSCE.
d) Exclusión del Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas que administra el OSCE.

87.3 El Reglamento tipifica las infracciones y establece la escala de sanciones correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Prevalencia de las normas de contratación pública

La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, salvo en el caso de los contratos estándar que se regulan conforme las cláusulas establecidas en los mismos.

Esta prevalencia también se aplica a los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. La conciliación y el arbitraje se regulan especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

La presente Ley y su Reglamento son de aplicación supletoria a los regímenes especiales de contratación siempre que no resulten incompatibles con tales normas especiales, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la presente Ley.

SEGUNDA. Excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información

La información contenida en el banco de preguntas utilizado para la rendición del examen para la certificación de los compradores públicos, la información con respecto a las ofertas que se genere en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como aquella de las

ofertas y la negociación derivada de los acuerdos de riesgo compartido para la adquisición de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo, se encuentra sujeta a la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información, por calificar como información confidencial, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 6 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS.

TERCERA. Regímenes especiales de contratación

a) Las Entidades Contratantes habilitadas a utilizar regímenes especiales de contratación, efectúan la contratación de sus bienes, servicios y obras conforme a lo establecido en dichos regímenes.
b) Las contrataciones realizadas a través de regímenes especiales de contratación cumplen con los principios establecidos en la presente Ley.
c) La creación o modificación de las normas que regulan los regímenes especiales de contratación requieren opinión previa favorable de la Dirección General de Abastecimiento.

Las disposiciones sobre el uso de la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado y el Registro Nacional de Proveedores para los regímenes especiales de contratación, entre otros, se establecen en el Reglamento de la presente Ley.

CUARTA. Régimen especial para las contrataciones de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)

PROINVERSIÓN, mediante acuerdo de su Directorio, previa opinión de la Dirección General de Abastecimiento, establece las disposiciones específicas para las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos que realice y que sean necesarias para la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y en la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado

QUINTA. Contrataciones de las Empresas del Estado

Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser contratados a través de proveedores nacionales o internacionales mediante el procedimiento de selección y las condiciones que especifique el Reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el Titular de la Entidad.

No se requiere la verificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEXTA. Colaboración entre Entidades

De manera gratuita, y sin límite de consultas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades de las que pueda requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente, para lo cual deben interoperar, salvaguardando las reservas o excepciones previstas por Ley con la finalidad que la Dirección General de Abastecimiento, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Central de Compras Públicas — PERU COMPRAS, puedan desarrollar las funciones que la ley le otorga.

SÉTIMA. Contrataciones para el mantenimiento vial

a) El reglamento de la presente Ley establece los procedimientos de selección para la contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial regulado en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.

b) Las Entidades Contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional en este tipo de servicios, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de la Ley.

OCTAVA. Previsión Presupuestal en las Compras Centralizadas

Tratándose de compras centralizadas, cuando las etapas de la Programación Multianual Presupuestaria y la Formulación Presupuestaria hubieran culminado y no se hubiere realizado la inclusión para las Compras Centralizadas, la emisión de la constancia de previsión presupuestaria para la convocatoria del procedimiento de selección se realiza previa comunicación del Titular de la Entidad Encargante garantizando la disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones, sujetándose a lo siguiente:

a) Cuando el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realizan en el año fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección, y la ejecución del contrato supera el año fiscal, la Oficina General de Presupuesto, o la que haga sus veces en la Entidad Encargada, otorga una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al monto estimado de la contratación que se ejecuta en los años fiscales posteriores.
b) Cuando las convocatorias a procedimientos de selección se realicen en el último trimestre del Año Fiscal respectivo, y el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción del contrato se realizan en el año fiscal siguiente, la Oficina General de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad Encargada otorga una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al monto de dicha convocatoria.
c) Dentro de los treinta días calendario de iniciado el correspondiente ejercicio presupuestal, la Entidad Encargante gestiona la transferencia de partidas señalada en la presente Ley para las Compras Centralizadas

NOVENA. Contrataciones de productos farmacéuticos o dispositivos médicos estratégicos con proveedores no domiciliados.

Excepcionalmente, la adquisición de productos farmacéuticos o dispositivos médicos clasificados como estratégicos que realice el Ministerio de Salud (MINSA) y/o el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema puede efectuarse con proveedores no domiciliados, siempre que se sustente que dicha contratación resulta objetivamente más ventajosa a través de un informe técnico y legal.

Los requerimientos se publicarán en la sede digital del MINSA y/o ESSALUD. El plazo mínimo que debe otorgarse a los proveedores para presentar sus cotizaciones no debe ser menor de 8 días calendario, el mismo que puede ser prorrogado o ampliado con el debido sustento técnico y legal.

El MINSA y/o ESSALUD están obligados a registrar en la Plataforma Digital para las contrataciones del Estado las contrataciones que realicen. Las cuales están sujetas a supervisión del OSCE.

DÉCIMA. Competencia judicial para actuaciones de OSCE

Cuando el objeto de una demanda contencioso administrativa verse sobre actuaciones de los órganos del OSCE, es competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva correspondiente al distrito judicial donde tiene su domicilio el OSCE.

En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en grado de apelación y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en casación.

Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior y en apelación la Sala Civil de la Corte Suprema, correspondientes al distrito judicial donde tiene su domicilio el OSCE.

Los procesos constitucionales de amparo sustentados en la presunta vulneración de derechos constitucionales, relativos a actuaciones de los órganos del OSCE, son conocidos en primera instancia por la Sala Superior Especializada en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia respectiva, y en grado de apelación, por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar, la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia y en apelación la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

No procede el proceso constitucional de amparo cuando exista una vía específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

Las medidas cautelares y demás resoluciones dictadas por jueces en contravención de lo dispuesto serán puestas en conocimiento de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del distrito judicial correspondiente, así corno de la Oficina de Control de la Magistratura respectiva, a fin de que, de oficio, se inicie el proceso disciplinario, de corresponder.

DÉCIMA PRIMERA. Contrataciones para la continuidad de proyectos bajo el Decreto Legislativo 1362

Cuando se produzca la caducidad de un contrato de Asociación Público Privada o Proyecto en Activos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1362, la e ntidad titular del proyecto, puede contratar directamente bajo el supuesto de desabastecimiento contenido en la Ley a aquellos proveedores necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Integración de las plataformas sobre contrataciones del Estado

La información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y otros sistemas complementarios sobre contrataciones del Estado, forman parte de la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La integración de dichos sistemas está a cargo del OSCE.

SEGUNDA. Procesos a cargo de la Dirección de Arbitraje de OSCE

Los procesos arbitrales a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje que hubiesen iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley seguirán siendo organizados y administrados por el OSCE hasta su finalización.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación

Se derogan los siguientes dispositivos y disposiciones, a partir de la vigencia de la presente norma:

a) Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado
b) Decreto Legislativo 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con excepción de la Cuarta y la Sétima Disposición Complementaria Final
c) Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas — Perú Compras.
d) Artículo 6 de la Ley 31738, Ley que modifica la Ley 29698

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JULON IRIGOIN Elva Edhit FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/03/2024 11:46:30-0500

Lima, marzo de 2024

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GARCIA CORREA Idelso Manuel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/03/2024 10:46:02-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/03/2024 11:09:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/03/2024 17:11:26-0500

MARÍA GRIMANEZA, ACUÑA PERALTA
Congresista de la República

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TRIGOZO REÁTEGUI Cheryl FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/03/2024 10:07:51-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/03/2024 11:02:57-0500

Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/03/2024 17:11:37-0500

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **6** de **marzo** de **2024**

Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición **N° 7189/2023-CR** para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:

1. **ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA, y**
2. **FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA.**

GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. LOS FUNDAMENTOS

1.1. LOS PROCEDIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA Y LA LIBRE COMPETENCIA

Es importante estudiar, para obtener una real visión del Sistema de Abastecimiento del Estado y la Ley de Contrataciones, referenciar primero cómo es que se distribuyen los recursos en los diferentes elementos de contratación; tal como podemos apreciar en el cuadro No 1

Cuadro No 1
Procedimientos de Selección Adjudicados por objeto contractual periodo 2018-2022

Objeto contractual	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
Bien	21 213	23 259	22 849	23 657	25 872	116 850	46.2%
Servicio	16 543	17 438	17 757	16 770	18 834	87 342	34.6%
Obra	7030	4875	5143	5404	7770	30 222	12.0%
Consultoría de obra	3119	3638	3768	3708	4111	18 344	7.3%
TOTAL	47 905	49 210	49 517	49 539	56 587	252 758	100.0%
	19.0%	19.5%	19.6%	19.6%	22.4%	100.0%	

FUENTE: Portal de Datos Abiertos del OSCE – Datos de la Convocatoria o invitación. Al 06.01.2023
ELABORADO: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Claramente se puede entender que recurrentemente el Estado Peruano invierte poco en obras, solo el 12%; en comparación a lo que invierte en bienes y servicios casi el 60%; tal circunstancia se traduce en una creciente brecha de infraestructura y en la escasa modernización y sistematización el estado.

El análisis de la Ley de Contrataciones del Estado, implica necesariamente tener una visión detallada, respecto a los procedimientos de selección, en la búsqueda de enfatizar la mejora en el flujo de los más importantes.

Los tipos de procedimiento más ejecutados durante el período analizado son la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica y la contratación directa. La Adjudicación Simplificada, que es utilizada para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre dentro de

los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público[1]; la Subasta Inversa Electrónica, que se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes[2]; y la Contratación Directa que se utiliza excepcionalmente, según los supuestos establecidos la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuadro No 2
Procedimientos de Selección Adjudicados periodo 2018-2022

Tipo de procedimiento de selección		2018	2019	2020	2021	2022	Total
Licitación pública	Procesos	2850	2835	2155	2578	2508	**12 926**
	%	6%	6%	4%	5%	4%	**5%**
Concurso público	Procesos	1901	2030	1642	2075	1981	**9629**
	%	4%	4%	3%	4%	4%	**4%**
Adjudicación simplificada	Procesos	29 274	27 307	19 888	23 415	30 925	**130 809**
	%	61%	55%	40%	47%	55%	**52%**
Subasta inversa electrónica	Procesos	3955	5054	4275	5576	6771	**25 631**
	%	8%	10%	9%	11%	12%	**10%**
Comparación de precios	Procesos	2506	3084	2823	3364	4377	**16 154**
	%	5%	6%	6%	7%	8%	**6%**
Contratación directa	Procesos	2242	2811	9362	6350	4045	**24 810**
	%	5%	6%	19%	13%	7%	**10%**
Procedimientos especiales	Procesos	5163	6059	9355	6136	5855	**32 568**
	%	11%	12%	19%	12%	10%	**13%**
LCE - otros	Procesos	14	30	17	45	125	**231**
	%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	**0.1%**
Total		**47 905**	**49 210**	**49 517**	**49 539**	**56 567**	252 758
%		19%	19%	20%	20%	22%	**100%**

FUENTE: Portal de Datos Abiertos del OSCE – Datos de la Convocatoria o invitación. Al 06.01.2023
ELABORADO: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

EL PROBLEMA

LOS PROBLEMAS DE LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO

El tema de la contratación con el Estado tiene muchas aristas y puede conducir a la aparición de una multiplicidad de cuestionamientos y consecuencias que generan como resultado en mediocre impacto de la inversión pública en la calidad de vida del ciudadano. Y si se pretender cambiar esa realidad, lo principal es no perder la perspectiva.

[1] Artículo 23° de la Ley de Contrataciones de Estado, TUO de la Ley 30225

[2] Numeral 26.1 del artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado, TUO de la Ley 30225

Los legisladores y técnicos que de alguna forma han tratado de plantear modificaciones y/o mejoras en la estructura del Sistema de Abastecimientos del Estado, no han priorizado el concepto fundamental de Valor por Dinero, sino que han priorizado como criterios de sus propuestas de cambio, los escándalos de fin de semana por corruptelas o por incompetencia de autoridades y funcionarios.

En el afán de "solucionar "tal realidad se ha sobre regulado, de tal forma, que el resultado de la Ley y su Reglamento se puede describir como un "Frankenstein Normativo" o como una pesada tela de araña cuya finalidad es que no pase nada. La conclusión es que al actual "establishment "político le importa más que no exista escándalo el fin de semana antes de que el ciudadano viva mejor.

La realidad es que el ciudadano está totalmente decepcionado del sistema político, del Estado y de su capacidad de gestión; pero también es real que existe un grave problema de principios en la ciudadanía, un grave problema cultural y un grave problema de formación de capacidades.

En este escenario es urgente mejorar ya, pero como los cambios radicales son complicados de aplicar en la sociedad occidental; se deben plantear cambios progresivos que construyan el camino hacia la libertad de decisión de la sociedad para decidir como invertir sus recursos.

Lo primero es reconocer, que el sistema actual, no funciona bien; una frase muy interesante de Deepak Chopra dice: *"cuando nos apegamos a algo, congelamos nuestro deseo, lo alejamos de esa fluidez y esa flexibilidad infinitas y lo encerramos dentro de un rígido marco que obstaculiza el proceso total de la creación"*.

LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Según la Contraloría General de la República, las contrataciones públicas, respecto a la ejecución presupuestal, representan aproximadamente el 41 % del presupuesto total. Por lo que es de vital importancia el éxito de su gestión, teniendo muy claro que el punto fundamental y primigenio de cualquier sistema de abastecimiento nacional es que cada sol utilizado genere el mayor impacto posible en la calidad de vida del ciudadano.

Aquí hay un primer punto, hay que tener muy claro, que es mejor obtener, un buen proceso o un eficiente resultado. El análisis de la problemática relacionada a la contratación pública siempre ha centrado su interés en las etapas del proceso, es decir, desde los actos preparatorios hasta finalizar con la ejecución contractual; pero es pobre el relacionamiento con el resultado. En ese sentido la idea de la propuesta es trabajar algunos aspectos controversiales de la normatividad.

Problemática del Plan Anual de Contrataciones[3]

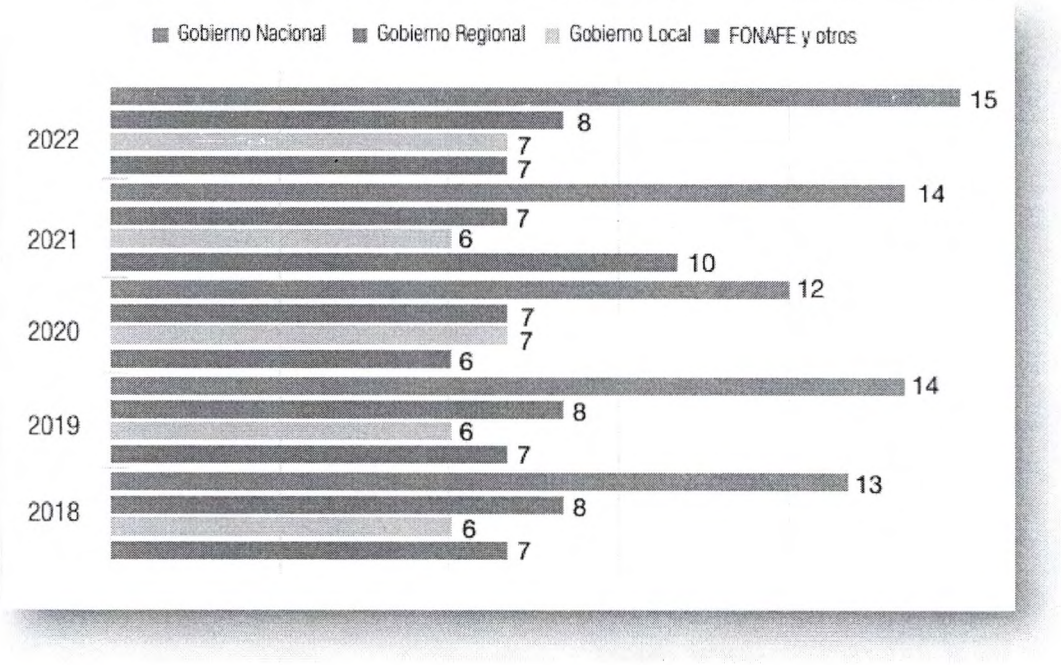
El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un documento en donde se realiza la previsión de todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que serán convocadas en un determinado ejercicio fiscal, con cargo a los respectivos recursos presupuestales; y obedece en forma estricta a satisfacer las necesidades de la entidad para el cumplimiento de su Plan Operativo Institucional (POI); necesidades

[3] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

que a su vez son identificadas por cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar[4]

El análisis de la tasa de modificaciones al Plan Anual de Contrataciones alerta acerca de la adecuada planificación de las necesidades institucionales, o si en cambio las entidades sufren de una débil capacidad de planeamiento. El resultado indica que, el promedio anual de modificaciones del PAC, oscila entre las 6 y 15 modificaciones, observando una distancia sustancial del valor promedio en el Gobierno Nacional, el cual casi duplica al valor promedio de los gobiernos regionales y locales.

Cuadro No 3
Promedio de modificaciones del PAC , por tipo de gobierno y año, periodo 2018-2022



Fuente: CONOSCE: PAC 2018-2021 y PAC 2022
Elaborado por: Subgerencia de Observatorio Anticorrupción - CGR

Sin embargo, al hacer una revisión a detalle se observó que, de las 2,815 entidades del sector público analizadas, el 83% de estas modificaron al menos en algún año hasta 12 veces su PAC. El 2% modificó en más de 36 veces anuales, existiendo casos preocupantes como es el caso del Seguro Social de Salud (ESSALUD) que en el año 2019 superó los 200 cambios en su PAC, llegando a un máximo de 294 cambios en el año 2022; es decir, en promedio por lo menos 17 veces en cada mes.

O también, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco que, llegó a modificar hasta 119 veces su PAC en el año 2018. De la misma forma, la

[4] Disposiciones Generales establecidas en el numeral V de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (en Arequipa), que en el 2021 llegó a cambiar hasta 82 veces su PAC.

Evidenciando claramente la debilidad en capacidades institucionales, pues realmente no planifican muy mal sus contrataciones, y esto conlleva al riesgo de que las mismas no estén vinculadas a las necesidades para prestar los servicios a cargo de la entidad o un gran desconocimiento de sus verdaderos requerimientos de contrataciones.

El análisis es bastante alarmante si se toma una fotografía nacional, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro No 4
Variaciones de los procesos y monto a convocarse en el PAC periodo 2018-2022

Nivel de gobierno	N° promedio de entidades	Procesos en el PAC		Variación procesos	Monto en el PAC (Millones S/)		Variación del monto	Monto promedio por entidad PAC final (Millones S/)
		Versión inicial	Versión final		Versión inicial	Versión final		
Nacional	352	41 413	97 239	135%	S/ 40 725	S/ 149 556	267%	S/ 425
Regional	525	22 341	71 981	222%	S/ 12 956	S/ 55 010	325%	S/ 105
Local	1738	42 029	135 118	221%	S/ 26 912	S/ 98 283	265%	S/ 57
FONAFE y otras (*)	201	32 771	39 296	20%	S/ 46 384	S/ 64 182	38%	S/ 319
Total	**2815**	**138 554**	**343 634**	**148%**	**S/ 126 977**	**S/ 367 031**	**189%**	**S/ 130**

Fuente: Subgerencia de Análisis de Datos - CGR sobre la Base de Datos del SEACE.
Elaborado por: Subgerencia de Observatorio Anticorrupción - CGR

Claramente se puede observar que en el período de análisis se planificaron 138,554 procesos y realmente se realizaron 343,634, es decir que las entidades públicas fallaron en planificar 205,080 procesos, esto denota una situación gravísima en el sistema pues no hay ni idea de los objetivos institucionales o no existe el enlace correcto con la Ley de Contrataciones.

Problemática del nivel de ejecución de los procesos programados[5]

Ya que se ha comprobado que la etapa de planificación no funciona, es importante determinar el nivel de ejecución de lo que acertadamente o no, se programa. En tal sentido, una comparación de la cantidad de procesos de programados versus la cantidad de procesos convocados durante el periodo, muestra que, el 37.0% no fueron convocados; este porcentaje indica que una

[5] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

importante cantidad de procesos programados por las entidades no se logran convocar. Lo cual implica, que se planificó mal, que sobraron recursos, que hubo objetivos que no se cumplieron y que se perdió dinero utilizando inútilmente recursos humanos y físicos que planificaron actividades que no se realizan.

Cuadro No 5
Procesos convocados vs no convocados en el PAC por año periodo 2018-2022

Año	Programado	Convocado	No convocado	% de no convocado
2018	64 482	41 121	23 361	36.2%
2019	68 778	42 985	25 793	37.5%
2020	70 102	43 057	27 045	38.6%
2021	63 521	43 328	20 193	31.8%
2022	76 751	45 396	30 355	40.9%
Total	**343 634**	**215 887**	**126 747**	
	100%	62.8%	37.2%	

FUENTE: CONOSCE - Plan Anual de Contrataciones, al 06.01.2023 y Subgerencia de Análisis de Datos - CGR sobre la Base de Datos del SEACE.
ELABORADO: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Problemática relacionada con las adjudicaciones sin concurrencia de postores[6]

Otro problema identificado, es que los intervinientes no están cautelando apropiadamente el cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública. Y quizás un indicio de esta circunstancia es que, efectuando un análisis del período en estudio, respecto de los procesos de selección adjudicados, vemos que un porcentaje importante de ellos han sido adjudicados en un proceso en el que solo ha concurrido un postor.

Lo cual puede implicar que los términos de referencia han sido adecuados a un solo proveedor o que a muy pocas empresas serias les interesa trabajar con el estado, con procesos tan complicados y burocráticos. Sólo trabajando en obras públicas las empresas que son incapaces de competir en el mercado privado.

La realidad es que pesar de la Ley de Contrataciones, demuestra que no es atractiva para los diferentes actores económicos, pues una gran cantidad de procesos son adjudicados sin concurrencia de postores, sin competencia de ofertas, sin posibilidad de obtener mejores condiciones de servicio.

Cuadro No 6

[6] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

Procesos de selección adjudicados por nivel de gobierno
Totales y con un solo postor
periodo 2018-2022

Nivel de gobierno – Otros	2018		2019		2020		2021		2022		Total adju.	Total un solo postor
	Adjud.	Un solo postor	Adjud.	Un solo postor	Adjud.	Un solo postor	Adjud.	Un solo postor	Adjud.	Un solo postor		
Local	20 517	11 682	19 294	7057	23 555	7934	20 800	6018	26 606	8335	110 772	41 026
		56.9%		36.6%		33.7%		28.9%		31.3%		37.0%
Regional	7835	2942	8242	2366	8359	3677	8884	3287	11 454	3423	44 774	15 695
		37.5%		28.7%		44.0%		37.0%		29.9%		35.1%
Nacional	14 640	6750	16 965	7545	14 452	7324	15 432	7341	15 222	7449	76 711	36 409
		46.1%		44.5%		50.7%		47.6%		48.9%		47.5%
FONAFE y otras	4913	2648	4619	2044	3151	1474	4423	1811	3309	1253	20 415	9230
		53.9%		44.3%		46.8%		40.9%		37.9%		45.2%
Total	47 905	24 022	49 120	19 012	49 517	20409	49 539	18 457	56 591	20 460	252 672	102 360
%		50.1%		38.7%		41.2%		37.3%		36.2%		40.5%

FUENTE: Portal de Datos Abiertos del OSCE – Datos de la Convocatoria o invitación. Al 06.01.2023
ELABORADO: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

La Contraloría también realiza un análisis comparativo para estudiar el efecto de los precios en los procesos de un solo postor y multipostores, aquí se aprecia lo siguiente:

Cuadro No 7
Comparación entre valor referencial y valor adjudicado en el año 2022 (procesos con un solo postor), en millones de soles

Tipo de entidad	Cantidad de entidades	Total de adjudicaciones	Monto referencial (Millones de S/)	Monto adjudicado (Millones de S/)	% de Competencia	Promedio		
						Adjudicaciones (Millones de S/)	Monto referencial (Millones de S/)	Monto adjudicado (Millones de S/)
Gobierno Local	1616	8335	8066	7927	98.3%	5.2	5.0	4.9
Gobierno Regional	418	3423	3595	3482	96.9%	8.2	8.6	8.3
Gobierno Nacional	335	7449	5855	5764	98.4%	22.2	17.5	17.2
FONAFE y otras	34	1253	2969	2952	99.4%	36.9	87.3	86.8
Total	2403	20 460	20 485	20 125	98.2%	8.5	8.5	8.4

FUENTE: Portal de Datos Abiertos del OSCE – Datos de la Convocatoria o invitación.
ELABORADO: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Cuadro No 8
Comparación entre valor referencial y valor adjudicado en el año 2022 (procesos con dos o más postores), en millones de soles

Tipo de entidad	Cantidad de entidades	Total de adjudicaciones	Monto referencial (Millones de S/)	Monto adjudicado (Millones de S/)	% de Competencia	Promedio		
						Adjudicaciones (Millones de S/)	Monto referencial (Millones de S/)	Monto adjudicado (Millones de S/)
Gobierno Local	1671	19130	7726	6016	77.9%	11.4	4.6	3.6
Gobierno Regional	497	9354	6992	5971	85.4%	18.8	14.1	12.0
Gobierno Nacional	353	4869	12971	12381	95.5%	13.8	36.7	35.1
FONAFE y otras	36	2774	925	850	91.9%	77.1	25.7	23.6
Total	2557	36127	28614	25218	88.1%	14.1	11.2	9.9

Se aprecia en los cuadros anteriores que la existencia de postores genera ahorros de valor por casi 3 mil millones de soles y deduce que esa es la razón por la que debe de existir una frondosa ley de contrataciones dirigida a asegurar el concurso.

Pero lo que no considera la Contraloría es la otra cara de la moneda, que esa frondosa normatividad ahuyenta a las empresas eficientes y suficientes; y solamente atrae mayoritariamente empresas sin capital e improvisadas que han traído como consecuencia en el año 2023, el siguiente panorama:

Cuadro No 9
Resumen de estado de obras paralizadas por nivel de gobierno año 2023 en millones de soles

	Nº obras				Costo Actualizado S/			
Nivel de Gobierno	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralizaron en Diciembre	Total a Diciembre	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralizaron en Diciembre	Total a Diciembre
G. Nacional	43	320	41	361	967,981,330	7,835,890,865	1,848,984,006	9,684,874,871
G. Regional	33	190	33	223	1,419,279,047	9,734,914,172	407,219,819	10,142,133,991
G. Local	88	1392	322	1714	368,496,314	6,100,314,873	1,064,875,877	7,165,190,751
Total general	**164**	**1902**	**396**	**2298**	**2,755,756,690**	**23,671,119,910**	**3,321,079,703**	**26,992,199,613**

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio de Economía y Finanzas e infobras de la CGR
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC – dic 2023

Por un lado, se destaca el ahorro que trae el concurso de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), pero por el otro no se compara que los 3 mil millones de ahorro por la pluralidad de participantes no se equilibran con los casi 27 mil millones por malos resultados de los concursos (malas empresas y profesionales incapaces de culminar su trabajo)

Problemática relacionada con la corrupción[7]

La Contraloría General de la República, concluye que: "*en el año 2019 se habría perdido el 14.9% del gasto público por problemas de presunta corrupción e inconducta funcional revelada en el marco de auditorías gubernamentales, en el año 2020 la incidencia fue del 12.6% del gasto público, para el año 2021 fue de 13.6% y para el año 2022 fue de 13.4%. Al revisar el monto estimado como pérdida de corrupción, este ascendió a S/ 94 038 millones para todo el periodo 2018-2022, correspondiendo el mayor monto al año 2022 (S/ 24 419 millones)*."

Problemática relacionada con los procedimientos que superan el monto tope[8]

Como está establecido en la LCE, cuando se oferta sobre el monto tope se genera una serie de ineficiencias en el gasto en el recurso humano del estado, pues se generan declaratorias de desiertos, por ejemplo.

SI hay muchos de estos casos, lo lógico es pensar que el proceso de cotización no es adecuado, se aprecia en el siguiente cuadro.

[7] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

[8] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

Cuadro No 10
Procesos que superaron su monto tope según nivel de gobierno y objeto de contratación,
periodo 2018-2022

Nivel de Gobierno	Objeto	Cantidad procesos superan tope	Monto procesos superan tope (millones de S/)	% del total de procesos	% del monto total
Nacional	Bien	514	S/ 891	3%	28%
	Consultoría de obra	58	S/ 124	5%	34%
	Obra	70	S/ 1111	9%	67%
	Servicio	723	S/ 3247	4%	56%
Regional	Bien	262	S/ 330	2%	14%
	Consultoría de obra	100	S/ 129	5%	27%
	Obra	176	S/ 3467	15%	80%
	Servicio	258	S/ 452	3%	26%
Local	Bien	462	S/ 593	2%	17%
	Consultoría de obra	61	S/ 50	1%	4%
	Obra	345	S/ 2507	2%	19%
	Servicio	196	S/ 688	2%	30%
FONAFE y otras (*)	Bien	304	S/ 861	6%	51%
	Consultoría de obra	31	S/ 56	4%	30%
	Obra	28	S/ 246	4%	33%
	Servicio	651	S/ 2664	6%	65%
Total		**4239**	**S/ 17 416**	**3%**	**37%**

FUENTE: CONOSCE: Adjudicación 2018 a 2021 descargado 02/09/2022 y Adjudicación 2022 descargado 16/01/2023.
ELABORADO: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción - CGR.

Cabe destacar del cuadro anterior, que "estratégicamente" el caso más repetitivo de superar el monto tope, es en las obras; cabe preguntarse ¿será estrategia para que gane determinada empresa?, ¿será estrategia para que se "caiga" el proceso?, o ¿será es que el que gana "sabe" que no va a terminar la obra y su negocio es el "adelanto" ?; como estás hay muchos cuestionamientos para analizar.

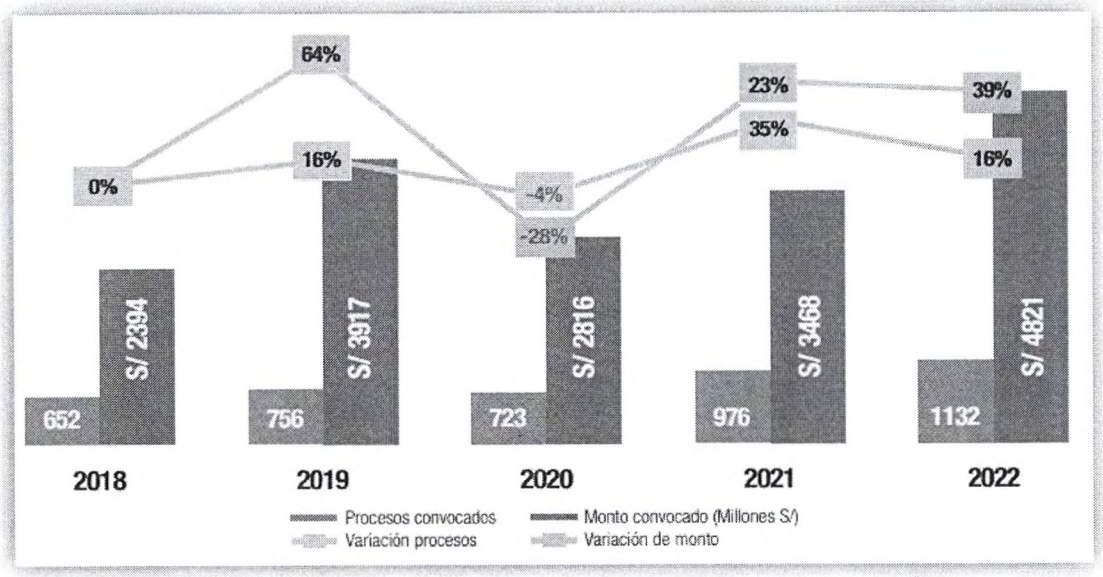
Al respecto, el OSCE alertó que en: "esta *fase de la contratación pública están las deficiencias para la indagación del mercado, ya sea por error u omisión, o poner exigencias injustificadas en las bases, así como deficiencias en la elaboración del requerimiento que sustente la contratación, ambos conllevan a que las empresas no decidan participar*".

Aquí también se tiene mucho de incapacidad técnica, se ha identificado que el 5.4% de las situaciones adversas identificadas se encuentran relacionadas con deficiencias de la indagación de mercado. Asimismo, se han alertado riesgos e irregularidades en la formulación del requerimiento; es decir, en la

determinación de la necesidad, esta circunstancia explica el 52.7% de las situaciones adversas identificadas en los servicios de control simultáneo y el 53.7% de las observaciones relacionadas a hechos con presunta irregularidad de los servicios de control posterior; lo cual es inconcebible, pues está relacionado a procesos de contratación que se licitan sin tener criterios claros y objetivos que lo sustenten, o cuando la necesidad responde más a un fin político que a una necesidad real[9]

Esta terrible circunstancia lamentablemente, no ha podido ser solucionada con los últimos cambios en la LCE.

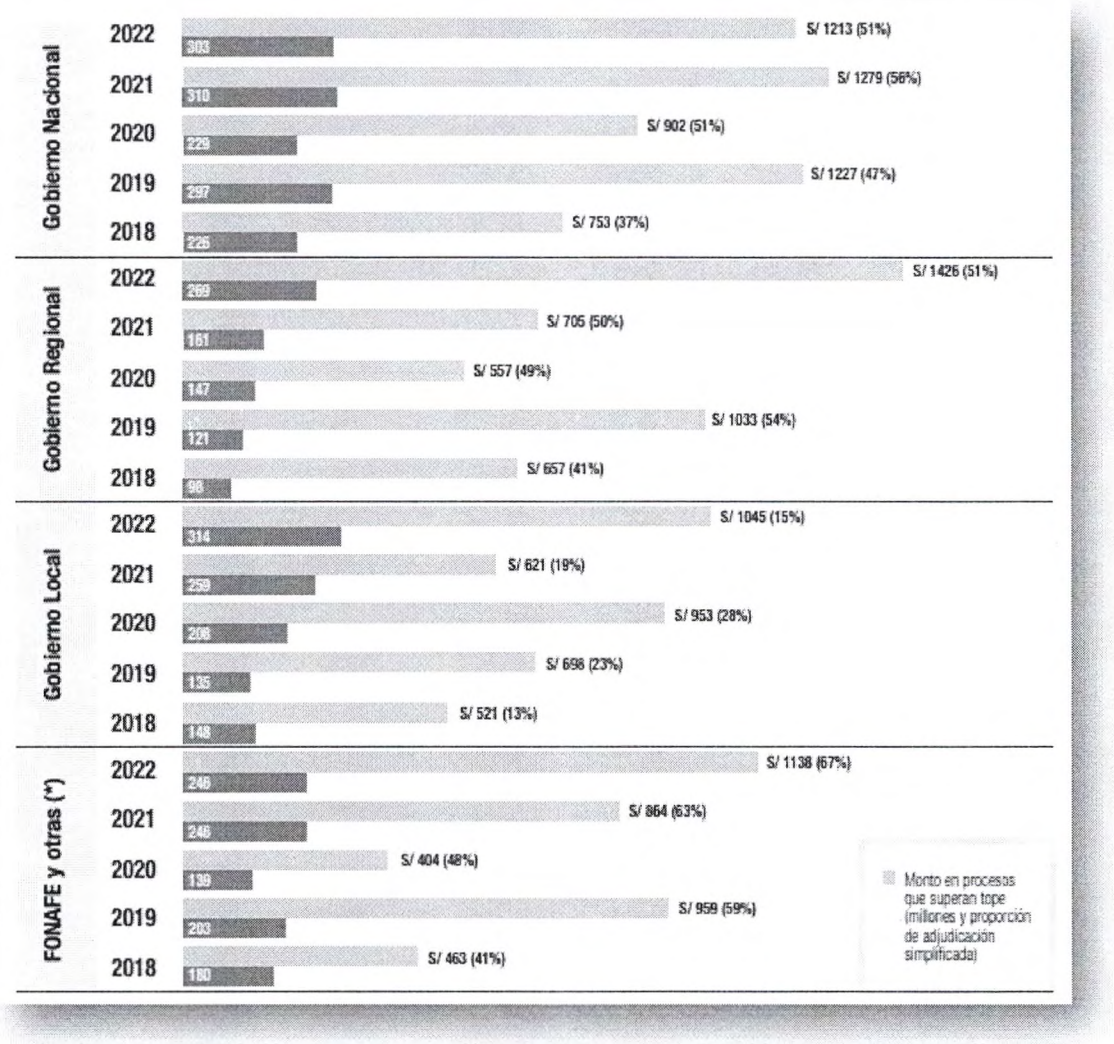
Cuadro No 11
Evolución de los procesos que superaron el monto tope, periodo 2018-2022



FUENTE: CONOSCE: Adjudicación 2018 a 2021 descargado 02/09/2022 y Adjudicación 2022 descargado 16/01/2023.
ELABORADO: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción - CGR.

[9] Cancino, Marco (2020). Corrupción en megaproyectos: marco conceptual y guía de análisis.

Cuadro No 12
Evolución de los procesos que superaron el monto tope en cada nivel de gobierno
periodo 2018-2022



FUENTE: CONOSCE: Adjudicación 2018 a 2021 descargado 02/09/2022 y Adjudicación 2022 descargado 16/01/2023.
ELABORADO: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción - CGR

Problemática relacionada con la capacidad técnica del personal que labora en las unidades encargadas de las contrataciones y certificaciones[10]

Actualmente, acertadamente se ha tomado la política de que los profesionales y técnicos que laboran en el área encargada de las contrataciones de las entidades

[10] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

públicas deben contar con la certificación por niveles[11] del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Existen tres niveles de certificación: básico, intermedio y avanzado. Cada nivel tiene una vigencia de 2 años. Vencido el plazo, los profesionales y técnicos pierden automáticamente su condición de certificado y tendrán que volver a solicitarla.

El problema aquí es que, si bien existe la política de mejora de la capacidad del Recurso Humano, su aplicación no es auspiciosa, pues de acuerdo a la plataforma de Datos Abiertos del Estado peruano[12] se cuenta con 3,084 entidades del Estado, de las cuales CONOSCE registra a 3,208 como contratantes y en el Portal de Datos Abiertos CONOSCE[13], se reporta que para el año 2020 solo se alcanzó un máximo de 223 certificaciones.

Otro gran problema es que la mayoría de personas certificadas son locadores, le siguen los CAS, es decir que los de planta continúan con escasa preparación y son los que más ingresos tienen.

Cuadro No 13
Certificaciones SICAN por modalidad de trabajo y área de desempeño al 31 de diciembre de 2022

Modalidad de contratación y lugar de trabajo según niveles de los profesionales y técnicos que laboran en entidades públicas

	Labora OEC*			Área usuaria				Total	Total general
	Básico	Inter.	Avan.	Total	Básico	Inter.	Avan.		
CAS	1682	1296	157	3135	724	237	24	985	4120
D.L. N° 276	644	296	10	950	268	70	2	340	1290
D.L. N° 728	514	482	74	1070	271	101	8	380	1450
Locación de servicios	2112	1068	89	3269	1418	285	17	1720	4989
Otros	325	155	7	487	425	63	3	491	978
Total con certificaciones	5277	3297	337	8911	3106	756	54	3 916	12 827

*Órgano Encargado de las Contrataciones
Nota: De las 12 948 de profesionales y técnicos del sector público, 121 no registraron lugar de trabajo.

[11] Establecida en Directiva 013-2017-OSCE/CD que entró en vigencia el 4 de setiembre de 2017. Aprobada mediante Resolución 019- 2017-OSCE/CD de fecha 19 de julio de 2017 y derogada con la Resolución 001-2019-OSCE/PRE, de fecha 08 de enero de 2019 que aprobó la Directiva 02-2018-OSCE/CD y ha sido modificada por Directiva N° 002-2020-OSCE/CD, aprobada con Resolución 031-2020- OSCE/PRE, y publicada el 16 de febrero de 2020 que entró en vigencia el 29 de mayo de 2020.

[12] https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/lista-de-entidades-del-estado-peruano

[13] https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Aportal%3Adatosabiertossican.html/content?userid=public&password=key#

FUENTE: Datos abiertos CONOSCE
ELABORACIÓN: https://public.tableau.com/app/profile/osce.bi/viz/PUBLICO_SICANV2/PUBLIC_SICAN e Control

Problemática relacionada con sanciones en contratos con el Estado[14]

Si analizamos exclusivamente este punto, se puede pensar que todo está perfecto y las empresas proveedoras del estado casi en su totalidad son serias y eficientes; dado el poco porcentaje de sanciones, que se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro No 14
Proveedores con alguna sanción según niveles de gobierno
Período 2018-2022

Nivel de estudio	Proveedores (número)			Monto adjudicado (millones de S/)		
	Total proveedores	Con alguna sanción	% del total	Total adjudicado	En proveedor con sanción	% del total
Nacional	32 105	1473	5%	S/ 88 046	8157	9%
Regional	20 288	919	5%	S/ 31 882	1593	5%
Local	54 614	1242	2%	S/ 69 025	3480	5%
FONAFE y otras	14 478	691	5%	S/ 44 396	3014	7%
Total	107 698 (*)	2572	2%	S/ 233 350	16 244	8%

FUENTE: CONOSCE: Adjudicación 2018 a 2021 descargado 02/09/2022 y Adjudicación 2022 descargado 16/01/2023; SEACE proveedores sancionados a setiembre 2022.
ELABORADO: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción - CGR.

Solamente el 2% de los proveedores están sancionados, bastaría con revisar simplemente cuantas obras paralizadas o con diversos problemas existen a nivel nacional. Claramente el régimen de sanciones ha sido demasiado blando.

LAS CONCLUSIONES

Se concluye, por todas las razones anteriormente detalladas, que es necesaria una reforma integral del Sistema de Abastecimiento del Estado y por consecuencia de la Ley de Contrataciones del Estado, los resultados, es decir la realidad, es inobjetable. Los sobre costos al Estado por corrupción, incapacidad técnica y la excesiva normatividad, traen como colofón casi 30 mil millones de ejecución paralizados y miles de obras mal hechas.

Es claro también que es una problemática de muchas aristas, que debe ser tratado integralmente para obtener resultados. Debe de existir una serie de

[14] Contraloría General de la República, Análisis de la Contratación Pública en el Perú 2018 - 2022

cambios progresivos que conduzcan a un cambio de mentalidad de la sociedad peruana y del trabajador público.

II. EL EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

La norma propuesta propone una serie de modificaciones y cambios estructurales del Texto Único Ordenado de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, promulgado mediante Decreto Supremo 082-2019-EF; y recoge el análisis y la revisión de diversas propuestas realizadas por diferentes gremios y estamentos del Estado, buscando optimizar la gestión de las contrataciones del Estado con un nuevo texto.

III. EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El presente Proyecto de Ley, no genera impacto monetario alguno para el Estado Peruano, pues se trata de un cambio normativo, cuya finalidad es optimizar la gestión de las contrataciones del Estado, e incentivar la participación empresarial público – privada.

Sectores perjudicados con la norma, no existen porque la idea es destrabar los procesos y desincentivar la participación de las malas empresas relacionadas a la gestión pública; quizás los únicos perjudicados en el cambio de norma son aquellos profesionales y empresas sancionadas por su dolosa participación en un proceso de contratación con el Estado.

En contrario, los sectores beneficiados con la norma, son los aproximadamente treinta y tres millones de peruanos, que mejoraran su calidad de vida, vía la mejor inversión de sus recursos.

IV. LA VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL.

Este proyecto está alineado, como debe de ser con la agenda legislativa nacional y las políticas nacionales e internacionales a nivel de macro y micro estructura.

a. Agenda Legislativa – Resolución Legislativa 002-2023-2024 - CR

El presente proyecto es concordante con el Objetivo III – Competitividad del País orientado la afirmación de una economía social de mercado (Política XVII) y la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica (Política XVIII)

b. Agenda 2030 – Naciones Unidad para el Desarrollo Sostenible.

Resueltos a poner fin al hambre y a la pobreza al 2030, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tenga la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda plantó 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y Bienestar
4. Educación de Calidad
5. Igualdad de Género
6. Agua Limpia y Saneamiento
7. Energía Asequible y no Contaminante
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
9. **Industria, Innovación e Infraestructura.**
10. **Reducción de Desigualdades**
11. **Ciudades y Comunidades Sostenibles**
12. Producción y Consumo Responsables
13. Acción por el Clima
14. Vida Submarina
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianza para Lograr Objetivos

El Perú es parte de esta agenda y este proyecto de ley también, con la propuesta; busca la consolidación de una mejor sociedad.

Para lograr esto es necesario demostrar que en el estado peruano se respeta a sí mismo y respeta a sus ciudadanos, y cumple sus compromisos. Que los actos de nuestros gobernantes sean el núcleo de la generación de una sociedad basada en la capacidad, el respeto y los valores

c. Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y la construcción de consensos, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país. Estas, proponen los cambios necesarios en aspectos sociales, políticos y económicos para alcanzar el bien común en un marco de desarrollo sostenible y afirmar su gobernabilidad democrática.

De las cuales, este proyecto, busca la consolidación de las instituciones del país, así como el fortalecimiento de confianza en el sistema democrático en base a un sistema de gobierno que respete los derechos ciudadanos.

Lima, marzo de 2024